

**Entre el temor y la esperanza.
Cuatro casos ejemplares y un colofón.
Una introducción a la economía
hispana actual**

Juan Velarde Fuertes

ENTRE EL TEMOR Y LA ESPERANZA. CUATRO CASOS EJEMPLARES Y UN COLOFON. UNA INTRODUCCION A LA ECONOMIA HISPANA ACTUAL

JUAN VELARDE FUERTES *

LA TRIBUNA IBEROAMERICANA

Por muchos motivos, interesa a los españoles la suerte económica de Iberoamérica, y no digamos de Portugal. En primer término, por pura fraternidad. El viejo tronco común, aparte de lo ocurrido a finales del siglo XVIII, se escindió definitivamente a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, entre sus diversos nuevos retoños existe tal afinidad que les apetece tener las ramas entrelazadas, sabiendo muy a fondo los unos de los otros. En segundo lugar, porque el mundo de los negocios de España tiene un campo importante de expansión en Portugal y en toda la región iberoamericana. Son tan patentes ciertas economías externas, que van incluso tan más allá del idioma en relación con estos países, que sería estúpido no aprovecharlas a fondo. Claro es que el beneficio puede ser alto si las cosas van bien en lo económico en el mundo hispano, y reducirse muchísimo, o incluso anularse, si la crisis galopa en estos países. Finalmente, el tercer motivo es pedagógico. Más de una vez, a lo largo de la Edad Contemporánea, España se ha encontrado en situaciones parecidas a las de estos pueblos. Hemos recibido los mismos cantos de sirena, capaces de hacer estrellarse a cualquier economía y, cuando hemos reaccionado con sagacidad desoyéndolos, el hacerlo ha rendido buenos y muy parecidos frutos a un lado y otro del Atlántico.

Es éste un momento muy delicado para nuestra economía. A partir de finales de 1991 parece haber perdido todo norte. Da la impresión de que al percibir, a partir de la formulación del Acuer-

* Académico Numerario de Ciencias Morales y Políticas.

do de Maastricht a finales de 1991, que habíamos despilfarrado en exceso el tiempo concedido para estar preparados para la unión económica y monetaria en Europa, la convergencia con el ámbito comunitario se convirtió en una letra a fecha cortísima, y al comprender que precisábamos ir en vanguardia en este proceso unificador, so pena de pagarlo con dureza en términos de desarrollo, hemos quedado desconcertados. Son estos momentos muy peligrosos. El primer demagogo que toque el caramillo puede arrastrar, como si España fuese Hamelín, a nuestra población hacia un fracaso histórico. El observar lo que ha sucedido en otros países, bastante semejantes en muchas cosas, cuando cedieron a las tentaciones y, también, cuando pusieron en orden sus casas, es adecuadísimo.

Por este triple motivo, éste pasa a ser el momento de la observación de la economía portuguesa y de la iberoamericana. Afortunadamente, acabamos de poderla contemplar desde un palco proscenio extraordinario. Dentro de las espléndidas novedades que ofrece la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es evidente que destaca la creación, financiada gracias a la colaboración de tres importantes entidades culturales –la Fundación Ramón Areces, la Fundación BBV y la Fundación Caja Madrid–, de la llamada Tribuna Iberoamericana. Para inaugurarla, se ha convocado en Madrid a tres dirigentes fundamentales de la política económica de la región: al Ministro de Hacienda de Chile, Alejandro Foxley; al también Ministro de Economía de la República Argentina, Domingo Cavallo, y, como cierre, al Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Pedro Aspe. Después, para concederles el título de académico honorario, la Academia llamó a su seno al portugués Aníbal Cavaco Silva y al uruguayo Enrique V. Iglesias.

Como contrapartida a ingresar los tres primeros como académicos correspondientes de la mencionada Corporación, y los otros dos como académicos honorarios, desarrollaron sendos discursos de un interés excepcional sobre la situación de sus países los cuatro primeros, y de reflexión sobre el conjunto iberoamericano, el último.

LA CRISIS, ¿SUPERADA?

El momento parece el adecuado. En 1991 comenzó a disiparse la tremenda crisis económica iberoamericana, que había estallado

en el verano de 1982, y que en la historia económica recibirá el nombre de *crisis de la deuda externa*, porque se manifestó alrededor de un colosal endeudamiento de Iberoamérica con los países más ricos. Recientemente, en el artículo «La transición económica latinoamericana. Perspectivas para los noventa», aparecido en el núm. 4, de 1992, de la *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, monográfico titulado *El resurgimiento de la economía iberoamericana*, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique V. Iglesias, indicaba por qué daba la impresión Iberoamérica, desde hace dos años, de haber doblado el cabo de las Tormentas. En primer lugar, por el restablecimiento general de las instituciones democráticas. La excepción de Cuba es la confirmación de la regla, y la situación del Perú de Fujimori es de clara evolución hacia una situación constituyente. Esto es muy importante, porque precisamente la independencia de la región se hace en medio de una ruda pelea entre los realistas, o absolutistas, y los liberales constitucionalistas, o independentistas. La democracia está en las entrañas del mensaje de los O'Higgins, Portales, Itúrbide, Juárez, Belgrano o San Martín, del mismo modo que, como adelantado, en Miranda, como prócer supremo, en Bolívar o, como postrero, en Martí. Patria, Constitución, democracia, se entremezclan íntimamente en todo el mundo hispano.

Como señala Iglesias, «ese renacer democrático trajo consigo, a la vez, la necesidad de actuar pronto y simultáneamente en varios frentes relacionados: la recuperación económica y el desarrollo sustentable a largo plazo; la solución de la deuda social y el establecimiento de condiciones permanentes de equidad distributiva, y la inserción de estas economías en el marco económico internacional».

Todo esto pudo haber fracasado si, como completa Enrique V. Iglesias, no hubiese surgido en muchos países «una nueva generación de líderes políticos, con ideas frescas, que pusieron en marcha uno de los procesos de cambio más profundos que ha tenido la región en lo que ha transcurrido de este siglo, guardando ciertas simetrías con aquellos cambios que han venido ocurriendo en el escenario económico mundial. Esos cambios se han proyectado, asimismo, hacia los empresarios privados, a la burocracia pública y, en general, a todos los sectores de la trama de las sociedades de nuestros países. La actitud generalizada en este proceso de renovación se caracterizó por el predominio del pragmatismo sobre las ideologías, resultante de una profunda reflexión crítica sobre el

pasado. Ese análisis crítico identificó como elemento central la excesiva tolerancia de los países con: *a)* la inestabilidad, tanto económica como política; *b)* la inflación y los déficit fiscales; *c)* la ineficacia asociada a las políticas proteccionistas, y *d)* la desigualdad económica externa», lo que, a su vez, exige «el ataque frontal a los déficit fiscales; la promoción de la eficiencia en las esferas de actividad privada y pública, y la búsqueda de soluciones de emergencia y estructurales a los problemas sociales».

Naturalmente que esto supuso abandonar en el baúl de los recuerdos –habría que decir, de los malos recuerdos– todo un haz de políticas económicas simultáneamente nacionalistas y populistas, que iniciaron su andadura hacia 1930 y que culminaron en las tesis del denominado estructuralismo económico latinoamericano. Casi podríamos decir que su crepúsculo matutino se halla en los populismos mexicanos que, con Madero, derribaron a Porfirio Díaz; su orto se encuentra en los manifiestos, llenos de orgulloso nacionalismo económico, de los grupos políticos y de los oficiales jóvenes –dentro de un fenómeno típico de «jóvenes turcos»– que apoyaron en Argentina el triunfo del general Perón; su ocaso se encuentra en el fracaso estrepitoso en Perú del intento de Alan García de reconstruir su economía de acuerdo con el modelo estructuralista económico latinoamericano interpretado por Carboneito.

Gert Rosenthal, bajo el título «La CEPAL ayer y hoy», en un artículo en *El Mercurio* de 26 de marzo de 1993, aclara así la relación de CEPAL con ese estructuralismo económico iberoamericano, que en algún momento fue tan íntimo que a esta doctrina se le dio, asimismo, el nombre de «cepalina»: «La Secretaría (de CEPAL) nunca ha concebido su matriz conceptual como un cuerpo inmutable de ideas o como una *doctrina cepalina*. Así, por ejemplo, se postuló la industrialización sustitutiva de importaciones y cierto activismo del sector público en una época en que era eminentemente razonable hacerlo (después de la II Guerra Mundial), con base en lo que, de todas maneras, estaba ocurriendo en los principales países, y a partir de una racionalización persuasiva y hasta elegante (la relación asimétrica entre el *centro* y la *periferia*). En el mismo sentido, hacia los inicios de los años sesenta, la institución alertaba sobre los riesgos de la protección a ultranza y planteaba la necesidad de promover las exportaciones. En la actualidad, aboga por la competitividad internacional como un imperativo de nuestros tiempos, y ofrece una propuesta actualiza-

da para alcanzarla (se titula *Transformación productiva con equidad*). Las constantes en el *pensamiento de la CEPAL* a través de los años son su vocación por el desarrollo y su identificación con América Latina y el Caribe.» El asunto es tan importante, que vuelve sobre él más adelante.

Durante más de sesenta años, una y otra vez, se ensayaron, desde el río Bravo al cabo de Hornos, mil variantes políticas y económicas heterodoxas. Lo que ahora sucede es la vuelta a la ortodoxia democrática y de la política económica, en coincidencia con el final de todo el alud de heterodoxias que había iniciado su andadura a partir del final de la I Guerra Mundial, y que ahora se esfuman en el mundo occidental todo, al que, por cierto, pertenece desde el siglo XVI la región iberoamericana.

EL CANSANCIO IBEROAMERICANO

Conviene, sin embargo, no echar las campanas al vuelo. No es lo mismo ajustarse el cinturón para adaptarse a estos nuevos planteamientos en economías ricas, como las de la Europa comunitaria, que en otras muy pobres, como las de la Europa oriental o las iberoamericanas. Con los últimos avances de CEPAL y del BID, de más rico a más pobre, el cuadro núm. 1 recoge la relación de los productos por habitante, en dólares 1988, de los países iberoamericanos en 1992. Los datos son provisionales, naturalmente, pero nos ofrecen órdenes de magnitud para entender parte del problema de la región.

Naturalmente que todas estas cifras se distorsionan por los problemas del tipo de cambio y porque no se estiman teniendo en cuenta las paridades de los poderes adquisitivos. A causa, pues, de las violentas oscilaciones en las cotizaciones de las monedas iberoamericanas respecto al dólar, existen variaciones a veces muy bruscas en estas rentas por habitante por lo que, en alguna ocasión, presentan panoramas a veces diferentes de los auténticos niveles de bienestar material. De todos modos, resulta mejor jugar con estas cifras que en ausencia de ellas.

No se incluyen ni Cuba, por no tener información mínimamente fiable, ni Haití, con 229 dólares 1988 de producto por habitante en 1992, por sus antecedentes no exactamente ibéricos, ni Trinidad y Tobago, Surinam, Bahamas, Belice, Jamaica, así como el conjunto de los países de la OECO –Organización de Estados del

Caribe Oriental-, por pertenecer al Caribe no ya no hispano, sino incluso no latino.

El producto por habitante del conjunto de Iberoamérica y el Caribe, en dólares 1988, para 1992, fue de 2.067. Aunque no sea una media demasiado representativa, por encima de ella quedan cinco países de gran superficie y población: Venezuela, Argentina,

CUADRO NUM. 1

<i>N.º de orden</i>	<i>País</i>	<i>R.p.c. 1992</i>
1	Venezuela	3.695
2	Uruguay	2.971
3	Argentina	2.932
4	Chile	2.844
5	México	2.313
6	Panamá	2.197
7	Brasil	2.129
8	Costa Rica	1.689
9	Paraguay	1.531
10	Colombia	1.448
11	Perú	1.305
12	Ecuador	1.278
13	El Salvador	1.083
14	Bolivia	917
15	Guatemala	915
16	Honduras	763
17	República Dominicana	694
18	Nicaragua	469

Chile, México y Brasil. La situación venezolana es, quizá, la más paradójica. Siendo el país de mayores ingresos por habitante, y con un futuro importante, se ha convertido en muy inestable políticamente. Como consecuencia, nada interesante podía aportar en este momento ni en cuanto a ejemplo ni en cuanto a seguridad de su futuro. Como mínimo, se debe esperar a las próximas elecciones presidenciales. Por su parte, Brasil ha caído en una espiral caótica en lo económico. En 1992 disminuye su producto por habitante un 3,1 por 100; el desempleo urbano sube del 4,8 por 100 en 1991 al 5,9 por 100 en 1992; el IPC –que se había incrementado, en diciembre de 1991 sobre diciembre de 1990, en un 475,8 por 100–, en noviembre de 1992 sobre noviembre de 1991 aumenta en un 1.131,5 por 100; el salario mínimo real urbano, para 1980 = 100, pasó de 59,9 en 1991 a 55,4 en 1992; la relación real de intercambio empeoró en 1992 un 2,1 por 100; la deuda externa total desembolsada alcanza el máximo histórico de

124.700 millones de dólares a finales de 1992. No es menos agobiadora la situación política, con un nuevo presidente, Itamar Franco, sustituyendo al depuesto Collor, que parece que se complace en complicar las cosas en vez de resolverlas.

Es evidente, por eso, que los tres países iberoamericanos convocados por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas son los más interesantes en estos momentos, y también los más próximos al mundo occidental y, por tanto, los tres candidatos primeros –en cabeza, México, y después, Chile y Argentina, por este orden– para una hipotética ampliación de la OCDE hacia el área iberoamericana.

Sin embargo, existen en los tres algunos factores de cansancio, porque la larga marcha de la estabilización, y de una apertura exterior susceptible de situar a los tres en el sendero del desarrollo, parece que es capaz de crear algunos factores de descontento de cierta importancia. Todo lo puede complicar bastante la coyuntura económica internacional. La crisis europea dificulta mucho que la Ronda Uruguay del GATT pueda ponerse con rapidez en marcha, abriendo los mercados comunitarios a la exportación iberoamericana –más concretamente, a la exportación de la región del Plata– y, en el caso de Estados Unidos, puede frenar los procesos de apertura iniciados con gran fuerza por el Presidente Bush, sobre todo en relación con la creación de un espacio económico de libre comercio que abarcase no sólo Canadá, Estados Unidos y México –el NAFTA–, sino que alcanzase, eventualmente, a Chile. En vísperas de su viaje a España, Alejandro Foxley, según *La Tercera* del 26 de marzo de 1993, se entrevistó en Washington, durante media hora, con el vicepresidente norteamericano Albert Gore. Este ratificó, «sin ambigüedad ni duda», el compromiso del presidente Clinton de buscar «un acuerdo de libre comercio con Chile inmediatamente después de que termine el NAFTA», aunque, sobre éste, Gore le «reiteró las dificultades legislativas que se están registrando en la aprobación del Tratado de las naciones del Norte, lo cual demandará cierto tiempo, imposible de determinar».

Por otro lado, los productos hortofrutícolas chilenos, en los que se habían depositado tantas esperanzas, comienzan a encontrar dificultades crediticias. En el Reino Unido, las cebollas españolas desplazan a las chilenas; la crisis de la producción láctea lleva, dentro de la PAC, a sustituir el ganado por frutales, con lo que, por ejemplo, las manzanas alemanas también desplazan a las chilenas. La crisis mundial, asimismo, empeora las relaciones reales de

intercambio de toda la región y puede postergar, de nuevo, más de una esperanza de salida rápida de la actual fuerte depresión económica.

Tengamos en cuenta, adicionalmente, que, según la CEPAL, la variación porcentual acumulada del PIB por habitante de 1981 a 1992 ofrece, a precios 1980, y en los dieciocho países iberoamericanos, de mejor a peor, el panorama que presenta el cuadro núm. 2.

CUADRO NUM. 2

<i>N.º de orden</i>	<i>País</i>	<i>Variación acumulada (1981-1992)</i>
1	Chile	+ 25,4
2	Colombia	+ 19,9
3	Uruguay	+ 2,6
4	Paraguay	- 1,3
5	República Dominicana	- 1,4
6	Panamá	- 3,0
7	México	- 4,8
8	Ecuador	- 5,2
9	Costa Rica	- 5,7
10	Venezuela	- 8,3
11	Brasil	- 9,3
12	Honduras	- 10,3
13	El Salvador	- 10,4
14	Argentina	- 11,2
15	Guatemala	- 16,9
16	Bolivia	- 21,1
17	Perú	- 31,8
18	Nicaragua	- 38,6

En todos estos países –salvo, quizás, en Colombia y Chile, y el motivo es comprensible– se observa una sorda irritación contra políticas de ajuste de larga duración. Valgan dos ejemplos recientes. En Bolivia estalló una revuelta importante en marzo de 1993, a pesar de que en 1992 se consiguió que su PIB creciese un 1,1 por 100, de que se redujo la tasa de desempleo urbano y de que se logró reducir la inflación desde la tasa hiperinflacionista del 8.170,5 por 100 en 1985, o bien –como se destaca en la tesis doctoral de Carlos Díez de la Guardia Bueno *La economía boliviana 1982-1985: la hiperinflación y la política económica* (Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, septiembre de 1991)– de que se redujo drástica-

mente el crecimiento del IPC a partir del que existía en los doce meses que concluían en septiembre de 1985, cuando mostraba una subida del 23.447,0 por 100, y cuando la cotización del boliviano, que había sido de 25 por dólar en enero de 1981, pasó a ser en septiembre de 1985 de 1.065.166 bolivianos por dólar y de 2.310.857 en enero de 1986. La Central Obrera Boliviana (COB) fue quien dirigió esta especie de huelga revolucionaria. Secuestró durante seis horas a tres ministros de Paz Zamora y a dos aviones con pasajeros, y un estudiante murió en Potosí al enfrentarse los huelguistas con fuerzas del Ejército que patrullaban con tanquetas, así como también en La Paz y Santa Cruz, hasta conseguir del gobierno, según declaró Oscar Salas, secretario ejecutivo de la COB, que no se transferirían «al sector privado las denominadas empresas estratégicas en los campos de las comunicaciones, la minería, los hidrocarburos, el transporte y la energía eléctrica... La privatización de esas empresas solamente podrá viabilizarse con el visto bueno de los trabajadores».

En Uruguay, el 13 de diciembre de 1992, se celebró un referéndum sobre once artículos de una ley que autorizaba la privatización de varias empresas estatales dedicadas a atender servicios públicos. Fueron rechazados por el 71,5 por 100 del censo electoral. En Paysandú, el rechazo fue del 77,43 por 100, y se atribuye a la cercanía de la ciudad a Argentina. Al glosar esto, Mario Beneditti señalaba: «La obediencia ciega a los lineamientos del Fondo Monetario y a la aplicación casi temática de las recetas neoliberales han provocado una situación social al borde del estallido. Proliferan las huelgas, los paros, las huelgas de hambre, las marchas de protesta. Los índices de la descomunal derrota son también el voto de castigo a una política despiadada e insensible. Lamentablemente, el Ministro de Economía, con el tácito aval del Presidente, intervino tras el descalabro para ratificar totalmente la política económica, porque “el gobierno no quedó muerto por la derrota”. Muerto no, pero sí agonizante.»

Esa situación que se observa en Bolivia, en Uruguay, por supuesto en Venezuela y en Brasil, y que puede llegar a otros lados, indica que la que podríamos llamar *política económica rectificada de Iberoamérica o nueva política económica iberoamericana* está aún lejos de encontrarse firme. El cansancio es un factor tan importante para el futuro económico de la región, que algo más adelante volveré sobre él. Pero si, a pesar de todas las dificultades, triunfa definitivamente la nueva política económica en Argentina,

Chile y México, es evidente que, tarde o temprano, ésta se extenderá como una mancha de aceite por toda la región. De ahí el interés por conocer lo que se proponen Foxley, Cavallo y Aspe.

TRES VIDAS PARALELAS

Impresiona observar el paralelismo de las vidas de Foxley, Cavallo y Aspe. Los tres inician sus estudios en centros importantes de sus países. Cavallo se doctora en Ciencias Económicas en 1970 en la Universidad Nacional de Córdoba; Foxley es ingeniero por la Universidad Católica de Valparaíso; Aspe es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). A continuación pasan a completar sus estudios en centros famosos de los Estados Unidos. Cavallo se doctorará en Economía por la Universidad de Harvard; Foxley también se doctorará en Economía por la Universidad de Wisconsin; Aspe recibirá este doctorado en Economía por el MIT.

Con estas armas, se convierten en profesores e investigadores notables. Cavallo pasará a ser profesor titular de las universidades Nacional y Católica de Córdoba y director fundador de la Fundación Mediterránea; Foxley explicará en la Universidad norteamericana de Notre Dame y, como visitante, en las de California-Berkeley, MIT, Oxford y el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, y se convierte en Presidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN). Aspe enseñará en el MIT, con Modigliani y Dornbusch; participará en las Lionel Robbins Lectures de la London School of Economics y será profesor largo tiempo en el ITAM e investigará en el Banco de México.

Como fruto de esa labor, son autores los tres de artículos y libros importantes, algunos de los cuales se han convertido en clásicos, al someter a crítica agudísima la situación económica de sus patrias respectivas: los *Volver a crecer* (Sudamericana-Planeta, 1984) y *La Argentina que pudo ser* (Manantial, 1989), de Cavallo; el *Chile y su futuro. Un país posible* (Cieplan, 1987), de Foxley, y el *Crisis and Adjustment in Mexico* (MIT, 1987), de Aspe, son objeto de continuas referencias por estudiosos y políticos.

Los tres comprendieron que era necesario acudir a la prensa para que sus conciudadanos tuviesen cabal noticia de los problemas económicos. Vemos a Cavallo publicar con abundancia en *La*

Nación, en *Clarín*, en *Ambito Financiero* y en *El Cronista Comercial*; a Foxley, en *Análisis* y en *Hoy*; a Aspe, en *Excelsior* y en *The Wall Street Journal*.

Finalmente, comprendieron los tres que tenían que asumir el reto político, precisamente en el momento en que toda Iberoamérica acepta, de nuevo, que la democracia debía ser el fundamento de la convivencia política. Cavallo se convertirá, en calidad de independiente, en 1989, al ser elegido Menem como Presidente de la República Argentina, en Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y en 1991, en Ministro de Economía. Alejandro Foxley será, primero, coordinador del Área Económico Social de la Concertación por la Democracia para la campaña presidencial de Patricio Aylwin y, como miembro de la Democracia Cristiana chilena, Ministro de Hacienda desde 1990. Pedro Aspe se convierte en 1986 en asesor para Asuntos Económicos del Director General del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, el órgano doctrinal del Partido Revolucionario Institucional (PRI); llega a ser Secretario de Programación y Presupuesto en 1987 y Secretario de Hacienda y Crédito Público, desde diciembre de 1988, con el Presidente Salinas de Gortari.

Menem, Aylwin y Salinas de Gortari —o, si se prefiere, Cavallo, Foxley y Aspe— decidieron poner coto a la crisis de la deuda externa que zarandeaba a los tres países, con caídas en el PIB, agobios de las balanzas externas, inflaciones fortísimas y paros acusados. Los tres ministros buscarán en la ciencia económica más rigurosamente académica la inspiración para su actuación política. Los tres economistas contemplan, ahora mismo, con gozo evidente, que al seguir sus consejos, sus países renacen a la esperanza.

Tan importante es esto que bien merece la pena observarlo más de cerca.

LA SOLUCION CHILENA

En el conjunto de la economía iberoamericana, Chile destaca, según una reciente estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por varios motivos. En primer lugar, porque ocupa en 1992 el primer lugar de toda Iberoamérica en la tasa de desarrollo medido por el producto interior bruto (PIB) por habitante para el periodo que va de 1981 a 1992, calculado siempre a precios de 1980. Durante ese periodo, como se ha

expuesto, sólo tres naciones tienen tasas acumuladas de desarrollo positivas: Chile, Colombia y Uruguay. El resto las tiene negativas. Pues bien, Chile, con el 25,4 por 100 de aumento del PIB por habitante es la de desarrollo más importante.

Se sitúa así, con casi 3.000 dólares de renta por habitante, en el cuarto puesto de desarrollo del área iberoamericana. Por supuesto que, comentando estas comparaciones, Rodrigo Fuentes, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, puso en guardia sobre deducciones apresuradas, a causa, sobre todo a corto plazo, de movimientos en el tipo de cambio del dólar con las respectivas monedas del área. Pero, de todos modos, una reciente estimación del Banco Central de Chile le situó en ingreso por habitante en el tercer lugar, y no en el cuarto, al haber sobrepasado a Uruguay.

Datos complementarios

Por lo que se refiere al PIB total, en el período 1981-1992 también se sitúa con la mayor tasa de los 19 países iberoamericanos independientes –Cuba no envía información mínimamente solvente como para poder entrar en la relación y Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Norteamérica–, con un incremento del 53 por 100. Agreguemos que el desempleo en el área metropolitana de Santiago cayó al porcentaje más bajo desde 1984: el 5 por 100. Finalmente, el IPC subió en 1992 un 14 por 100, una tasa inflacionista también históricamente muy baja. Los salarios reales, sobre 1980 = 100, están situados en 1992 en 114,9 y el salario mínimo, también en términos reales, ha conseguido alcanzar en 1992 el nivel de 1980, recuperación que, de once países iberoamericanos en que se ha podido estudiar el fenómeno, sólo se ha logrado en tres: Paraguay, Colombia y Chile. El sector público se salda sistemáticamente con superávit desde hace muchos años; en 1992, éste supuso el 1,8 por 100 del PIB. Para 1980 = 100, el valor de las exportaciones chilenas llegó en 1992 a 212, el mayor incremento iberoamericano, detrás del paraguayano, que alcanzó el 275. Exportó por valor de 10.000 millones de dólares e importó por una cuantía de 9.200 millones. La Bolsa chilena mejoró sus índices de cotización de modo sistemático desde 1985, y siempre por encima del IPC, salvo en 1987. Finalmente, la deuda externa supone únicamente 18,8 miles de millones de dólares, una cifra

muy manejable –las reservas internacionales de Chile son del orden de 9,5 miles de millones de dólares–, por lo que produce una seguridad para los prestamistas extranjeros tan alta que el precio de los pagarés de la deuda externa chilena en el mercado secundario ha subido en noviembre de 1992, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones Unidas, en porcentaje, respecto a su valor nominal, del 62 por 100 en enero de 1990 hasta el 90 por 100 la cotización más alta de estos pagarés iberoamericanos. La economía chilena quedó libre de riesgo en los mercados financieros internacionales. Es la única de Iberoamérica que ha merecido ese galardón.

Esta situación satisfactoria, quizá la más equilibrada de toda la región, no se ha creado por casualidad. Es el resultado de un trabajo muy serio de rectificación de errores. El último de estos últimos fue el del gobierno Allende, de Unidad Popular, elegido en 1970. Como señala Patricio Meller en su excelente trabajo de síntesis de la historia económica contemporánea chilena, titulado «Una perspectiva de largo plazo del desarrollo económico chileno, 1880-1990», publicado en el volumen, coordinado por Meller y Magnus Blomström, *Trayectorias divergentes. Comparación de un siglo de desarrollo económico latinoamericano y escandinavo* (CIE-PLAN-Hachette, 1990), «la Unidad Popular estimaba que el patrón de desarrollo económico anterior era demasiado lento. Este crecimiento relativamente lento estaba asociado con el control de la economía, y específicamente de la industria manufacturera, por monopolistas extranjeros y nacionales. Para acelerar el crecimiento se requerirían profundos cambios estructurales, lo que significaba que el Estado debía tener un mayor control de la economía y transformarse en el Estado-planificador central. Pensaba también que ésta era una condición necesaria para la construcción de una nueva sociedad socialista». El trabajo de D. Hachette y R. Lüders, «El proceso de privatización de empresas en Chile, 1974-1982», publicado en el *Boletín Económico*, núm. 22, de 1987, del Instituto de Economía de la Universidad Católica, nos muestra cómo las empresas estatales, que participaban en 1965 en la generación del 14,2 por 100 del PIB chileno, saltaron al 39 por 100 en 1973.

Era el final de un proceso que había señalado un célebre político español, Francisco Cambó, desde su observatorio argentino de Mon Repos. Escribía Cambó el 22 de marzo de 1944, en sus *Meditacions-Dietari (1941-1946)* (Alpha, 1982), esta declaración, que tenía mucho de profecía escalofriante: «Ahora en Chile, ante

la situación terrible provocada por el *match* infernal de la puja constante entre los salarios y el incremento constante del coste de la vida, se les ha ocurrido a la agrupación de las izquierdas el siguiente programa: "Defensa del régimen democrático; adhesión del gobierno chileno a la Carta del Atlántico; establecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con la URSS; creación del Banco del Estado y del Consejo de Economía; defensa de las leyes sociales protectoras de empleados y obreros; medidas enérgicas contra el constante aumento del coste de vida; plan agropecuario con intervención del Estado; subsidio familiar para los obreros, e indemnización a los obreros por años de servicio." Y esto lo han votado seriamente unos señores que gobiernan... y que pretenden seguir gobernando un país que, cuando no hacía demagogia, figuraba entre los primeros de América. No es posible que quienes han votado el programa no supiesen que sus conclusiones, unas son totalmente inocuas; otras significan el agravamiento de las causas que han provocado la crisis actual... y otras serán, en caso de aplicarse, otro factor de miseria. No, no han votado por convicción, sino por cobardía. Y el régimen democrático chileno caerá por esta cobardía de los que se proclaman sus defensores.»

La doctrina cepalina

A partir del final de la II Guerra Mundial, el proceso de desorden económico chileno se aceleró como consecuencia de la difusión de las doctrinas corrientes en la CEPAL. Carlos F. Cáceres, en su artículo «Transición económica: la experiencia chilena», publicado en la *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, núm. 4, de 1992, nos indica que Chile adquirió, en ese sentido, algo así como un talante de adelantado de estos *modelos cepalinos*, basados en las tesis del llamado estructuralismo económico latinoamericano, que desde Chile fueron imitados por el resto de los países iberoamericanos.

Este modelo, como veremos algo más adelante, encajaba perfectamente en el populismo del programa izquierdista que asustaba, y con tanta razón, a Cambó. En el caso de Chile, se creyó, como indica Cáceres, que «el desarrollo se alcanzaría a través de un proceso de industrialización hacia adentro. Se protegió a la industria nacional (cada vez más ineficiente) con aranceles y todo tipo de barreras para-arancelarias, y a los cultivos agrícolas tradi-

cionales (trigo, arroz, remolacha, etc.), independientemente de si eran o no los procesos agrícolas más rentables. Para evitar las restantes alzas de precios de los bienes comestibles básicos se comenzaron a aplicar fijaciones generalizadas de precios, y el Gobierno actuó como proveedor del exceso de demanda de estos bienes a través de importaciones». A partir de ahí todo se hizo trizas. El sistema tributario procuraba allegar recursos para esta situación a través de un conjunto impositivo «desordenado y opresivo». Cada vez más habitualmente, estos recursos se conseguían sencillamente a través de la inflación. El cambio entró en crisis y todo empujaba hacia arriba a los tipos de interés, a lo que respondía la autoridad económica otorgando créditos selectivos directamente, ya a través del Banco Central, ya gracias a CORFO (Corporación de Fomento de la Producción, que desempeña un papel semejante a nuestro INI), o ya mediante otras instituciones bancarias públicas.

La propuesta de Foxley

Desde la *Tribuna Iberoamericana*, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Alejandro Foxley, Ministro de Economía de Chile, pronunció una conferencia titulada «Transición democrática con crecimiento económico y equidad social». Tras las victorias electorales de octubre de 1988 y de diciembre de 1989, al triunfar en las elecciones presidenciales el candidato democristiano Patricio Aylwin, el nuevo régimen tenía que exponer con claridad cuál iba a ser su modelo de política económica.

La Administración Pinochet había defendido como modelo económico la concesión de un énfasis esencial al sector privado, el liberar el mercado, el liberalizar asimismo al sector externo y el desregular, en todos los sentidos, la economía. Añadamos la Reforma Previsional, realizada en Chile en 1980, que creó para los regímenes de pensiones por vejez, invalidez, viudedad y orfandad un sistema de capitalización individual de administración privada, a través de las llamadas administradoras de fondos de pensiones (AFP), que sustituyó a grandísima parte del sistema de reparto que imperaba en la seguridad social chilena. Como señala Luis Larraín en su trabajo «Sector previsión», incluido en el libro dirigido por Cristián Larroulet *Soluciones privadas a problemas públicos* (Instituto Libertad y Desarrollo, 1991), a causa de la

necesidad de invertir que experimentan estos fondos de pensiones, las AFP «se convirtieron en las mayores inversionistas institucionales del mercado». Por supuesto que ahí se encuentra, también, uno de los puntos más delicados del nuevo sistema. Aun con el pesado choque que el modelo experimentó como consecuencia de la *crisis de la deuda externa* –el PIB cayó un 16 por 100 durante el período 1982-1983, el paro creció hasta situarse por encima del 30 por 100 en 1983 y por encima del 20 por 100 hasta 1986; los salarios reales se redujeron casi un 20 por 100, y durante cinco años subieron muy poco–, el modelo se mantuvo, y cuando Aylwin recibe los poderes en 1990, como señala Patricio Meller, respecto al resto del área iberoamericana, «Chile tiene una situación macro-económica relativamente mucho mejor y ha alcanzado una base estructural más sólida para las perspectivas de crecimiento y desarrollo en la década de 1990».

La Administración Aylwin había considerado que la *economía social de mercado* era la «opción que garantizaba mejores oportunidades para un desarrollo sostenido». Pero éste debía concretarse, tras la positiva experiencia económica anterior y el caos al que había conducido a Chile el gobierno de Unidad Popular, en «un crecimiento estable, basado en la inversión y en las exportaciones, en lugar de bonanzas artificiales de corto plazo». Para eso fue preciso, primero, combatir el excesivo crecimiento –casi un 10 por 100– de 1989, que da la impresión que pudo deberse a exigencias electoralistas de Büchi-Pinochet; en segundo lugar, en 1990 resultó obligado trasladar al mercado las alzas en el precio del petróleo y no acudir a subsidios del sector público para evitar momentáneos impactos inflacionistas.

Se unió todo esto, que en el fondo podía estar en el programa opositor de la derecha (UDI-RN), con un planteamiento social original, que constituyó el que se podría denominar *sello de Foxley*: una reforma tributaria que, por supuesto, no alteró en lo esencial la línea fiscal aprobada en 1984, heredada, a su vez, de la de 1974, capaz de financiar un mayor gasto social en áreas tales como la salud, la educación y la vivienda y, al mismo tiempo, para que este programa reformista no originase ninguna perturbación que fuese suficiente para provocar un superávit fiscal. Durante los tres años de mandato de Foxley, efectivamente, se generó «un superávit fiscal equivalente a un 2 por 100 del PIB en promedio, llegando a un 3 por 100 del PIB en 1992».

Se concede también mucha importancia al crecimiento de la

formación bruta de capital fijo, que en 1992 se aproximó «a un 23 por 100 del PIB, la tasa más alta registrada en el país». Para no tener que financiar, de modo masivo, tal esfuerzo inversor con ahorro externo, con las consecuencias habituales derivadas de estos endeudamientos –pensemos que en los años setenta y ochenta el ahorro nacional chileno alcanzó, como promedio, al 10,7 por 100 del PIB–, se procuró que éste se incrementase; en 1992 llegó al 19,6 por 100 del PIB.

El impulso a la economía procede, sobre todo, del sector exterior. A pesar de la coyuntura depresiva, las ventas al exterior se incrementaron, en 1992, a una tasa real del 12 por 100. Con legítimo orgullo, pudo señalar Foxley «que la economía chilena compete hoy fuertemente con los más eficientes productores mundiales en una amplia variedad de rubros. Chile exporta hoy más de un tercio de su producción y un 70 por 100 de ella está constituida por bienes transables internacionalmente». Japón es su primer socio comercial. Aproximadamente, dijo Foxley, «Chile distribuye sus exportaciones en proporción de aproximadamente un tercio para cada uno, en los mercados de Asia, la CE y América».

Finalmente, el modelo supone la existencia de un alto grado de concierto –«una especie de obsesión nacional», subrayó Foxley– entre el sector público y el privado; entre gobierno y oposición; entre ejecutivo y Congreso, y entre empresarios y sindicatos, lo que origina que «el número de días de huelga por trabajador y por año haya sido de los más bajos del mundo».

Las preguntas de Foxley

Pero Foxley no es un iluso. Cuatro grandes retos abren sus interrogaciones ante el futuro de Chile. El primero lo formula, con precisión, así, y sospecho que mirando bastante lo sucedido en España: «¿Cuánto tiempo es posible contar con este ánimo de cooperación para seguir adelante con una política económica rigurosa, caracterizada por el equilibrio fiscal y el fuerte énfasis anti-inflacionario?»

La segunda es doble, y se refiere a las consecuencias de esa decidida apertura al exterior de la economía chilena. En primer término, «¿es posible contar con [los]... *pactos de solidaridad* para la segunda y más difícil fase de la reconversión productiva que haga posible un sector manufacturero de alta productividad que

se desarrolle hacia los mercados externos, mano a mano con las actividades que constituyen hoy la base del éxito exportador de Chile, los recursos naturales?». Léase, en ese sentido, el largo artículo de Eduardo Sepúlveda «Crisis del carbón: ¿Muerte natural o eutanasia?», aparecido en *El Mercurio* el 21 de marzo de 1993. Jorge Garrido, dirigente sindical de la empresa hullera estatal Carville asegura: «Es una utopía aferrarse al carbón, dada la política energética del Gobierno, pero abandonarle ciento por ciento, tampoco queremos. En Chile todavía no ha sido aprobada la ley de eutanasia, y ningún partido, gobierno o candidato está facultado para matar al carbón.»

La otra pregunta relacionada con esta necesaria apuesta al exterior se debe al auge del proteccionismo que se palpa en la actitud de las grandes potencias económicas mundiales, y la fórmula así: «¿Cómo podrá Chile –en ese escenario internacional– contrarrestar las crecientes presiones internas para cerrar y proteger su economía?»

Un documento que circulaba en marzo de 1993 por Chile, titulado *¿El fin del sector exportador?*, señala que el que continúen creciendo las exportaciones no es señal de bienestar del sector: «Este aumento de las exportaciones totales se explica en gran parte por el efecto de inercia que tiene la maduración de las grandes inversiones y, por otra, debido al gran esfuerzo de inversión en productividad de las empresas que compiten en el mercado mundial, aumentando sus producciones y mejorando sus costes para compensar márgenes cada vez más estrechos. Así, mientras el aumento bruto de las exportaciones aparece como un éxito, al interior de las empresas la realidad es muy diferente.»

El cuadro núm. 3, que muestra la caída de resultados contabilizados en pesos constantes de seis empresas, tres –COPEC, CMPC y Celulosa Arauco– que dependen del mercado exterior y tres –Endesa, Teléfonos y Entel– que se basan en el interior, prueba con claridad que Chile tiene ahí un serio problema.

Finalmente, todo el modelo económico chileno descansa en un complicado entramado que requiere una democracia ejemplar. Todo partido político que se dedique a buscar financiación a costa de empresas privadas que no la entreguen voluntariamente, por motivos ideológicos palpables, pasa a insertarse en un sistema parecido al que desarrollaron, basados en el pago de la protección, todos los bandidajes del mundo mediterráneo –recuérdense los clásicos ensayos de Hobsbawn–, tanto en los lugares de naci-

miento del fenómeno como fueron la Mafia siciliana, la Camorra napolitana o el bandolerismo decimonónico andaluz estudiado por Zugasti, como en los industriales a los que se trasplantaron, de acuerdo con lo que sucede con la Cosa Nostra en Norteamérica.

CUADRO NUM. 3

Empresas	<i>Resultados en miles de millones de pesos 1992</i>				
	1988	1989	1990	1991	1992
COPEC	107,8	128,2	70,0	60,1	60,1
Endesa	91,2	69,4	46,9	76,5	99,5
CMPC	75,9	113,0	74,7	59,1	64,1
Celulosa Arauco	70,1	57,3	41,2	24,6	24,4
Teléfonos	32,5	66,7	42,4	56,2	70,5
Entel	27,5	39,4	27,6	30,8	35,0

Como señala Foxley, al no haber resuelto adecuadamente la democracia chilena el problema de la financiación de los partidos políticos y de las elecciones, ¿cómo hacer que el sistema –y es evidente que cuando hablaba de esto tenía que pensar, a la fuerza, en Italia y España– se convirtiera en invulnerable «a las irregularidades financieras y la corrupción que ha irrumpido como una epidemia en las democracias más avanzadas»?

Yo me atrevo a agregar otra pregunta adicional, que se me planteó desde que me trasladé a Santiago de Chile a estudiar las AFP, entonces recién creadas, y que, tras contemplar lo que ocurrió con el sistema bancario chileno en 1982, aun se acentuó más. Las inversiones que fundamentan su rentabilidad son valores con respaldo del Estado y acciones de sociedades anónimas. Esto último puede complicar las cosas. Basta un ejemplo. Las recientes noticias de las pugnas de los accionistas de la *Endesa* chilena se fundamentan, en gran parte en las dispares tomas de posición de AFP Provida Fondo de Pensiones –con el 6,75 por 100 del capital–, AFP Santa María Fondo de Pensiones –con el 5,69 por 100–, AFP Habitat S. A. –con el 4,99 por 100–, AFP Summa Fondo de Pensiones –con el 3,01 por 100–, AFP Unión S. A. Fondo de Pensiones –con el 2,33 por 100– y, finalmente, AFP Cuprum S. A. Fondo de Pensiones –con el 2,23 por 100–, que, como señalan Bernardita del Solar y Claudio Gaete en *Qué pasa* del 6 de febrero de 1993, pueden afectar a la buena marcha de la que es, hoy en día, la mayor empresa chilena y, con ello, a la de las propias AFP. Con

una inflación baja, un sistema fiscal adecuado y una economía en auge, como sucede hoy con la chilena, hasta ahora no existe problema. Pero ¿qué ocurrirá con las AFP en caso de que se instale en Chile una crisis grave y, sobre todo, si se desarrolla con un fuerte acompañamiento inflacionista?

LOS ACTIVOS ARGENTINOS

A partir de 1991, parece haber cambiado el panorama de la economía argentina. En 1991, el PIB total creció un 7,3 por 100, y en 1992, un 6 por 100, con lo que se pudo, al fin, superar el nivel de lo producido en 1981 en un 4,1 por 100. También, como es natural, sube estos dos últimos años el PIB por habitante: un 6 por 100 en 1991 y un 4,8 por 100 en 1992. Aun así, el nivel de esta última macromagnitud anda todavía un 11,2 por 100 por debajo del nivel de 1981. El paro, que en 1989 alcanzó la tasa, altísima en Argentina, del 9 por 100, se ha situado en el 6,9 por 100, que es cifra preocupante, pero más corriente.

Pero, sobre todo, lo más aparatoso es la disminución de la inflación. En 1989 ésta bordeó el despeñadero de la hiperinflación, con un incremento, de diciembre de 1989 sobre diciembre de 1988, del 4.983,6 por 100, pero en marzo de 1989 se había situado en la tasa anual del 22.100 por 100 y en junio de 1989 alcanzó la tasa mensual del 200 por 100. El violento viento inflacionista barrió al presidente Alfonsín de la vida política argentina y trajo al presidente Menem. Bajo su Administración, también medido de diciembre a diciembre, el IPC se situó en el 1.343,9 por 100 en 1990, en el 84 por 100 en 1991 y en el 18 por 100 en 1992.

Menem, que milita en el Partido Justicialista, ha conseguido que, sin grandes traumas sociales, el mundo trabajador argentino acepte que disminuyan sus remuneraciones de modo claro. Medido el fenómeno a través de las remuneraciones salariales totales medias en la industria manufacturera, para 1980 = 100, se ve que éstas disminuyeron de 92,7 en 1988 a 84,6 en 1989, a 80,3 en 1990, a 76,2 en 1991 y a 75,6 en 1992. Por supuesto, esto ha producido incomodidades y escisiones en la CGT argentina, pero la fraternidad peronista ha actuado de modo implacable.

El esfuerzo exportador es palpable. Para 1980 = 100, el índice del valor de lo exportado se situó, en 1992, en 158. Las importaciones no crecen, desde luego, tan aprisa. Su índice en 1992, para

1980 = 100, es 139. De todos modos, el mercado internacional no ayuda al esfuerzo argentino. De 1980 a 1992, en dólares corrientes de cada año, cayeron los precios de una serie de mercancías argentinas de exportación, como se recoge en el cuadro núm. 4.

CUADRO NUM. 4

<i>Mercancías</i>	<i>Precios anuales ponderados</i>	
	<i>1980</i>	<i>1992</i>
Trigo (dólares por tonelada métrica)	177,4	129,0
Maíz (dólares por tonelada métrica)	210,3	140,1
Soja (dólares por tonelada métrica)	296,0	239,0
Carne de vacuno (centavos dólar/libra)	125,9	110,2
Lana (centavos dólar/libra)	194,5	125,4

La balanza comercial ha pasado a tener un ligero déficit en 1992 de 365 millones de dólares, lo que contrasta con los superávits tradicionales. La que tuvo en 1992 un déficit muy fuerte, del orden de los 6.800 millones de dólares, fue la balanza por cuenta corriente. Como el movimiento neto de capitales supuso una entrada del exterior de 9.300 millones de dólares, las reservas internacionales aumentaron unos 2.500 millones de dólares.

La deuda exterior, que había alcanzado en 1989 los 63.314 millones de dólares, se situó en 1992 en los 58.000 millones. Un alivio todavía más claro se manifestó en la relación entre los intereses totales devengados y el valor de las exportaciones de bienes y servicios. En 1984 suponía el 57,6 por 100; en 1987, aún era del 50,9 por 100, y en 1989, del 51,2 por 100. Sin embargo, en 1992 únicamente supusieron los intereses el 27,3 por 100 del valor total de lo exportado. Como es natural, esto ha supuesto una mejoría en el precio de los pagarés de la deuda externa argentina del 12 por 100 de su valor nominal en enero de 1990, el 50 por 100 en junio de 1992 y el 41 por 100 en noviembre de 1992.

La necesidad de mirar atrás

A partir de un famoso estudio de Díaz Alejandro, quedó muy claro que la economía argentina había atinado a insertarse del modo más adecuado en la economía mundial en el siglo XIX. A su compás, tuvo altísimas tasas de desarrollo y comenzó a comportarse como las de otros cuatro países que se han convertido en

opulentos miembros de la OCDE: Estados Unidos y Canadá, en América, y Australia y Nueva Zelanda, en el Pacífico. Para siempre quedará en los argentinos el agradecimiento hacia Colin Clark, porque en 1942, cuando redacta el librito *La economía de 1960*, aún apuesta a fondo por el futuro de su economía. Hoy, con unos 3.000 dólares de renta, si se apresta a participar en la dura carrera del desarrollo, debe volver la vista atrás para analizar por qué corrió desembarazadamente en ella de 1880 a 1930 y por qué, a partir de esta fecha y hasta ahora mismo, más que carrera, lo que se observa en el caso de Argentina es un continuo conjunto de caídas espectaculares y de cansinos progresos.

Precisamente eso explica la estructura de la intervención de Domingo Cavallo, el actual Ministro de Economía de la República Argentina, en la Tribuna Iberoamericana de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Para explicar el proceso presente de cambio político, económico y social, comenzó por echar una mirada atrás, al año 1880.

En lo político, 1880, con el Presidente Julio Argentino Roca al frente del Partido Autonomista Nacional, se inaugura una nueva Administración y, con ella, una etapa nueva en el país. Esto significaba la paz y la solución de una larga guerra civil que enfrentaba diversas concepciones del país, sobre todo después de que Urquiza derrotase a Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1862. Eduardo Wilde sostenía, al contemplar esas conmociones: «No hay tal nación argentina ni la ha habido nunca; lo que ha habido es una ficción en la que las dos partes, Buenos Aires y las provincias, se creían explotadas.» Roca fue capaz de resolver esta situación. Buenos Aires, como indicó José Arce, dejó de ser, de hecho, «la nación, porque las provincias del interior han reclamado la voz que les corresponde en el cónclave, y se convierte de derecho en la Capital de la Nación, lo que no es lo mismo».

Ha aparecido, pues, en 1880, la nación argentina en su total integridad, y con ella el mensaje presidencial de Roca se pone en marcha con el lema, que casi parece de nuestros regeneracionistas, de «paz y administración». Eso supuso, en el terreno económico, en primer lugar, la liquidación de una situación monetaria caótica. La Ley 1.130, de 5 de noviembre de 1881, adhiere el peso al patrón oro. Por supuesto que acontecimientos económicos como los de 1884 supusieron costes en la libre convertibilidad de los billetes. La energía de Carlos Pellegrini logró, en 1890 y 1891, que retornase, tras una dura estabilización, el patrón oro.

La segunda acción de Roca se dirigió a la creación de una infraestructura capaz de soportar un fuerte desarrollo económico. En 1885, en el Congreso, exponía así la base más importante de su política: «Si se ha gastado mucho, ahí está como capital activo de la Nación. Los ferrocarriles concluidos o a concluirse, los telégrafos, puertos y puentes..., los edificios y obras exigidas por la evolución.»

El tercer punto de apoyo fue la aceptación del librecambismo. La presidencia de Mitre (1862-1868) había hecho suyas las doctrinas del libre comercio que tanto habían jugado –recordemos a Manuel Belgrano– en el alzamiento independentista de 1810. El librecambismo no se puso en marcha sin polémicas. Recuérdesse el debate de la Ley de Aduanas de 1876 y, en particular, la intervención en la Cámara de los Diputados de Vicente F. López, francamente vinculada a la tesis entonces tan corriente del «fomento del trabajo nacional». Roca supo superar esas tentaciones y Argentina se incorporó al tráfico internacional, especializándose en aquello en que tenía una mayor ventaja comparativa, la producción agropecuaria.

El cuarto aspecto fue, de modo semejante a como sucedía entonces en Estados Unidos, expulsar a la población india de las praderas. En los postreros años del último Virrey, Hidalgo de Cisneros, éstos aún acampaban en las proximidades de Buenos Aires. Fue decisiva en ese sentido la llamada «Campana del desierto» llevada a cabo por Roca, quien hablaría con orgullo de «los millares de leguas conquistadas al salvaje».

Así es como se crearon las condiciones para recibir una fuerte importación de capitales, de empresarios y de mano de obra. Como se señala por Hebe Noemí Campanella, en esa obra fundamental que es *La generación del 80. Su influencia en la vida cultural argentina* (Tekne, 1983), «el desarrollo económico –aprovechamiento intensivo de las vastas praderas, trazado de nuevas líneas férreas para favorecer la expansión del comercio, mejoramiento del ganado y de los servicios públicos– exigía no sólo poblar la nación, sino también movilizar capitales, y si lo primero se logró con el aporte del sur de Europa, lo segundo se obtuvo fundamentalmente del norte, en especial de Gran Bretaña».

Se rompió así la inercia latifundista que parecían imponer, a mediados del siglo XIX, los dueños de enormes extensiones de tierra, que respondían a unos pocos apellidos legendarios: los Anchorena, los Unzué, los Alzaga, los Lastra, los Corcuera. La

ganadería nueva se articula, desde 1885, en torno a la famosa Sociedad Rural. La actividad generada por las exportaciones de carne, cueros, lana y granos pasó a ser vertiginosa. Asombrado, John H. Williams escribiría en *El comercio internacional argentino en un régimen de papel moneda convertible (1880-1990)* (la edición en inglés es de 1917; en español, es la de la Universidad Nacional de Córdoba, 1965): «No es mucho decir que en esos diez años (1880-1890) la Argentina tuvo un desarrollo mayor que en todas las décadas que le precedieron en ese siglo.» Hasta 1930, como ha probado el doctor Cavallo, su ritmo de desarrollo se sitúa entre los más altos del mundo occidental. La tasa media anual de crecimiento real del PIB argentino a lo largo de los setenta años que van de 1860 a 1930, es la colosal del 5 por 100. Cifra tan alta no la alcanza en ese periodo ninguna otra nación.

Todo se altera precisamente a partir de 1930. El golpe del general Uriburu, en septiembre de 1930, tiene mucha importancia. Interrumpe una situación democrática que era bastante normal desde que en 1880 los 40.000 hombres que manda Roca consiguen la federalización de Buenos Aires, a pesar de los esfuerzos de la Guardia Nacional y de las milicias de Tejedor. Por supuesto que existió el sobresalto de 1905, pero nada de esto pasaba de ser un conflicto bastante superficial. Pero en 1930, el Ejército, que había sostenido, parecía que sin fisuras, al presidente Hipólito Yrigoyen, contempla en silencio cómo éste es depuesto por una oficialidad joven que intenta emular otros modelos extranjeros: los jóvenes turcos; la Dictadura de Primo de Rivera; el nacionalismo francés; el fascismo italiano; los complicadísimos nacionalismos germanos con sus organizaciones paramilitares, como los Cascos de Acero y las SA. Todo esto deja una huella muy honda en la oficialidad joven que sigue a Uriburu. Mientras el Ejército se depura de los militares yrigoyenistas, se nutre ideológicamente de literatura nacionalista, entre la que destacan las publicaciones del grupo FORJA. La oficialidad joven que participó en 1930 –Jorge Abelardo Ramos en *La era del peronismo, 1943-1976* (Ediciones del Mar Dulce, 1981) menciona entre ellos a Perón, Silva, Lucero, Sosa Molina, Ramírez, Descalzo–, crea el núcleo de un auténtico tercer partido, al que debería llamarse *partido militar*, que, desde entonces, entra en la alternativa del poder; primero, con conservadores y radicales; después, con radicales y peronistas. Desde la constitución del GOU –o Grupo de Oficiales Unidos–, en el que es evidente la influencia del coronel Perón, como destaca R. A. Potash

en *El Ejército y la política en la Argentina*, es evidente que este partido existe. Cuando Perón entra en el juego bipartidista, lo rompe, al pasar a actuar contra Perón, como sucede con el levantamiento de Lonardi, que derriba al justicialismo en 1955.

Una nueva situación

Estos acontecimientos iniciados en 1930 causaron, en relación con la situación económica, una serie de consecuencias perturbadoras. Cavallo mencionó, como más importantes, la pérdida de la estabilidad política; la separación del sistema económico mundial, facilitado porque la gran depresión acentúa la ruptura del comercio internacional; el que se azuce en todas partes, incluida la Argentina, hacia el triunfo a las posturas autarquizantes; el crecimiento a partir del mercado interior, que llevará a un creciente aislamiento político, incluso exhibido como una bandera, como sucedió con la famosa Tercera Posición peronista, que facilita, a su vez, el encapsulamiento económico; finalmente, la ampliación del tamaño del Estado, que incluso le va a conducir a adueñarse de empresas hasta los límites pintorescos de la relación que Serraouille publicó en la revista *Desarrollo Económico*, lo que, a su vez, explica que el Estado comience a tener crecientes déficit fiscales. La consecuencia de esto es grave. Al perder el crédito, el sector público ha de recurrir una y otra vez a la inflación, hasta llegar al paroxismo ya reseñado de 1989.

El cambio

Para Cavallo, el cambio se inició en 1983, al reinstaurarse la democracia tras el descalabro experimentado por el Proceso, o partido militar, en el conflicto de Malvinas. Este es el papel histórico del presidente Alfonsín. El país comienza a normalizarse en lo político gracias a la puesta en marcha, de nuevo, de la Constitución de 1853. El cambio político no afecta sólo al interior, sino al exterior. En 1984 se acepta, en virtud del *laudo papal*, la paz con Chile; en 1985 se inician buenas relaciones con Brasil, eliminando la costosa carrera nuclear entre las dos potencias, mientras comienza Mercosur a dar los primeros pasos. Menem acentuará la apertura: restablece las relaciones con el Reino Unido; firma el

Tratado de Asunción, por el que Mercosur abarcará Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; ratifica el Tratado de Tlatelolco, de no proliferación de armas nucleares; participa en el conflicto de Irak como un aliado más de Norteamérica.

Con el flanqueo de esta apertura al exterior se inicia el segundo cambio: el de la reorganización del Estado para achicar sus competencias. En este sentido, desempeñó un papel fundamental un importante administrativista y veterano justicialista, José Roberto Dromi. Sin consultar su obra *Reforma del Estado y privatización. Introducción, notas y texto ordenado* (tres tomos, Astrea, 1991), es imposible comprender lo sucedido. Previamente, había expuesto un adelanto de estas ideas en un libro que firmó juntamente con Carlos Menem, publicado antes de alcanzar éste la presidencia y titulado *Reforma del Estado y transformación nacional* (Editorial Ciencias de la Administración, 1990). La privatización de las empresas públicas tuvo una doble consecuencia: alivios presupuestarios y, en tanto en cuanto parte de estos activos pasan al extranjero, robustecimiento de la balanza de pagos y sostenimiento de la cotización de la moneda nacional.

Este achicamiento del Estado, que permitió reducir el gasto público en un 10 por 100, permitió atender mejor el flanco social, allegando más recursos a la seguridad social. Por otro lado, procuran fomentarse las transferencias de gastos a las provincias y a los municipios, por creer que así se racionalizan los desembolsos del sector público. Al mismo tiempo, se mejora la Administración tributaria y pueden eliminarse tributos dañinos por sí mismos, como los impuestos a la exportación, creándose una estructura tributaria muy simplificada, basada en el IVA; en un impuesto sobre los beneficios de las empresas; en otro sobre la renta de las personas físicas; en las contribuciones para la seguridad social, y, finalmente, en los impuestos especiales sobre naftas, alcoholes y tabaco. Con la simplificación aumentó la recaudación. Cavallo señaló en su intervención que, a partir de 1991, se había eliminado el déficit. Sin embargo, según CEPAL, el sector público no financiero nacional —o sea, excluidas provincias y municipios—, tuvo en Argentina, en 1991, un déficit del 2,2 por 100 del PIB, magnitud que, de todos modos, es un porcentaje tolerable.

La tercera pieza fue la liberalización del mercado, tanto respecto al exterior —disminuyen los aranceles y se eliminan controles de precios y de cambios, al aceptarse para el peso un patrón dólar, con convertibilidad plena— como en el interior. Facilitan esta

situación las privatizaciones de las empresas estatales de todo tipo, incluidas las de electricidad, puertos, gas y su distribución, y transportes ferroviarios. Estas tendrán que competir, en régimen de libertad de tarifas, con la carretera. Se piensa privatizar las centrales nucleares y los aeropuertos. Al final, quedarán en manos del Estado –del sector empresarial público– únicamente el Banco de la Nación Argentina y el Banco Hipotecario.

Todo se vendría abajo si el peso no fuese una moneda estable. Pasa a ser clave, por eso, el funcionamiento de una Caja de Conversión en el Banco Central para mantener perfectamente convertibles en dólares los pesos, que, de esta manera, pueden transformarse en una moneda aceptada con normalidad. Como dijo gráficamente Cavallo, «se comienza a pedir el vuelto» en las transacciones comerciales. Con un 12 por 100 de aumento anual del IPC y un 3 por 100 de los precios al por mayor –la diferencia viene determinada por las rigideces de los servicios–, incluso se pensó que sería posible que se redujese en el inmediato futuro este IPC al aumento, en 1993, de alrededor del 3 por 100, porque se iba a actuar con fuerza sobre los servicios.

También se había decidido alterar la estructura de la seguridad social con la nueva ley de subsidios y pensiones, que va a conducir a un sistema de capitalización que, de algún modo, se va a parecer al modelo chileno. Finalmente, Menem, gracias al conocimiento de las estructuras sindicales y al apoyo del aparato peronista –o, por mejor decir, neoperonista–, se atreve a plantear la necesidad de flexibilizar el mercado del trabajo.

No habló Cavallo de la corrupción. Sin embargo, en *Somos* del 18 de enero de 1993 le atribuían un papel esencial en la liquidación del Ministro Manzano, que, decía la revista, era «el nombre sospechoso de corrupción para la opinión pública». «El Mingo», como llama Menem a Cavallo, también procura que se esfume este elemento de perturbación infiltrado en la economía argentina. Tampoco mencionó su papel en la desregulación de las obras sociales sindicales. No ha logrado todo lo que pretendía, pero tras sus conversaciones con el Ministro de Trabajo, Enrique Rodríguez, el panorama ya ha cambiado.

Las consecuencias no pueden ser mejores. Se recupera la inversión, que se incrementa en un 30 por 100 anual, aunque hay que admitir que se partía de niveles muy bajos. Mejora la productividad en el seno de las empresas. Vuelven los capitales argentinos huidos al exterior. El aumento del ahorro interno permite

prescindir del externo, con alivio para la situación de la deuda externa. Caen los índices de pobreza, y si crece el paro, al mismo tiempo que lo hace el empleo, al incremento del índice de actividad se debe. Como colofón, Argentina, que tuvo un muy buen sistema educativo en el pasado, se dispone a recuperarlo, con crecientes niveles de exigencia y de calidad. Sencillamente, para que toda esta honda transformación no sea flor de un día.

¿Durará esta situación? Todo depende de dos cosas: de la llegada de fondos del exterior y del mantenimiento de la recaudación impositiva. Ahí se va a jugar el futuro, no ya de Cavallo, que ha atinado en el modelo, pero que puede ser trastornado por la coyuntura internacional, sino el de la Argentina. Alguna nubecilla minúscula, como las declaraciones efectuadas a *Clarín* sobre la situación social de las fincas de Jujuy, muy en el estilo del viejo peronismo, por el Ministro de Salud y Acción Social, Julio César Araoz, quizá pueda convertirse en tormenta y desbaratarlo todo.

Cuando se puso en marcha una vasta protesta, que hundió los razonables proyectos de Krieger Vasena y sus sucesores, hasta precipitar en 1969 hacia una seria crisis, se recordó lo que César Fernández Moreno había escrito en 1954, en *Argentino hasta la muerte*, como muestra de que los argentinos del interior «habían resuelto poner término al reino de la eficacia»:

Y bueno soy argentino
este es el revirado *canto natal* que yo traigo aquí
I'm sorry a usted le molestará sepa que a mí también
pero alguna vez tenemos que acercar la realidad a los papeles
esta bronca me sale de ser argentino
soy gaucho y entiendaló
soy de los de acá de este lugar y no de otro...

¿Julio César Araoz va a intentar provocar ese motín? ¿Menem podría tolerarlo? ¿La Argentina se ha cansado y está dispuesta a volver al sendero iniciado en 1930? Todos los que escucharon a Cavallo en la Tribuna Iberoamericana formularon votos porque estas posibilidades fuesen sólo un mal sueño.

EL NUEVO MEXICO

Jesús Silva-Herzog, un notable economista mexicano que ha sido, hasta fecha reciente, Embajador de México en España, prácticamente casi iniciaba su conferencia «México hoy, en el nuevo

entorno internacional», de clausura del programa *México hoy*, de la Tribuna Americana en la Casa de América, el 23 de octubre de 1992, con estas palabras: «Hace diez años éramos un país en crisis. Nos tocó el difícil papel de hacer estallar la crisis de la deuda externa. la inflación amenazaba con caer en cauces hiperinflacionarios, el desequilibrio fiscal era mayúsculo, las reservas internacionales se habían agotado y, lo más importante, la sociedad había perdido la confianza no sólo en la moneda, sino en las instituciones y en el futuro.»

Como contrapunto a todos y cada uno de estos durísimos problemas, nos encontramos, por lo que se refiere a la afluencia de capitales extranjeros, que, según el *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe*, 1992, ese año de 1992 «la cuenta de capital de México continuó registrando una considerable afluencia de recursos externos... Alrededor del 60 por 100 de estos recursos se destinaron a inversiones en cartera (bonos y acciones), mientras que un quinto se destinó a la inversión directa. Asimismo, cabe señalar la mejora en la calificación del riesgo asociado al país y la reapertura de algunos segmentos del mercado internacional de capitales». Esto explica que la deuda externa alcanzase, en 1992, la cifra más alta de su historia: 106.000 millones de dólares. Sin embargo, la relación entre los intereses totales devengados y las exportaciones de bienes y servicios, que había llegado a ser del 42,5 por 100 en 1982-1983, y que había descendido paulatinamente hasta el 29,9 por 100 en 1989, prosiguió esta baja continua situándose en la carga, ya realmente soportable, del 19,2 por 100 en 1992. Al mismo tiempo, es evidente la mejoría en las cotizaciones de los pagarés de la deuda externa en el mercado secundario, pues suben del 35 por 100 de su valor nominal en noviembre de 1989 al 63 por 100 en noviembre de 1992.

Por lo que se refiere a la inflación, ha sido muy marcada la caída desde 1987, fecha en la que se experimentó un incremento anual del IPC del 159,2 por 100. En 1991 alcanzó sólo un 18,8 por 100, pero en 1992 llegó sólo al 12,9 por 100, lo que parece mostrar el éxito del llamado Pacto para la Estabilidad. La CEPAL considera que este triunfo mexicano sobre la inflación se debe a «la disciplina fiscal, monetaria y crediticia, al limitado deslizamiento del tipo de cambio en un contexto de sustancial ingreso de capitales externos y ascenso de reservas internacionales, y al mantenimiento de los esfuerzos de concertación (social)». Al mismo tiempo, mejoran las remuneraciones medias reales de los trabaja-

dores, que, para 1980 = 100, alcanzaban en 1987 el nivel 71,3; en 1991 ya llegaban a 83, y en el primer semestre de 1992 se situaron en el 85.

Como señalaba Silva-Herzog, con legítimo orgullo, «el enorme déficit gubernamental de hace diez años (17 por 100 del PIB) se ha convertido en un superávit estimado en algo menos del 1 por 100 del PIB para 1992. Este hecho nos coloca en la lista de los muy pocos países del mundo que tienen saldos positivos en sus finanzas públicas. Por supuesto que este resultado ha requerido actuar del lado del gasto y del ingreso; en este último campo han tenido lugar enormes avances, sobre todo en los últimos años, en la mayor conciencia fiscal de los contribuyentes».

Un problema siempre serio es el del enorme desequilibrio de la balanza comercial mexicana. Las importaciones ascendieron en 1992 a 46.205 millones de dólares y las exportaciones a 27.375 millones. El déficit, que había sido de 4.433 millones de dólares en 1990, subió a 11.063 millones en 1991 y a los 18.830 millones actuales. Se observa, como consecuencia de este saldo, que han surgido algunos atisbos de proteccionismo no arancelario que se esconde púdicamente con el nombre de «medidas administrativas orientadas a evitar prácticas desleales de comercio y a reforzar el cumplimiento de normas nacionales de calidad». Pero no parece existir agobio por la falta de fondos internacionales. El endeudamiento del sector público, hasta septiembre de 1992, aumentó con facilidad en 1.200 millones de dólares gracias a bonos situados en plazas europeas y norteamericanas. También fue muy fuerte el endeudamiento de las empresas privadas en el exterior, aunque, al provocar alguna saturación, tuvieron que admitir que subiesen los tipos de interés. En el mantenimiento de un nivel saneado de divisas también ha participado el proceso de privatización de las empresas públicas. Su ritmo ha sido tan fuerte en los últimos años que mereció de Silva-Herzog el calificativo de «tal vez excesivo». Como subrayó éste, «hemos vendido las aerolíneas, los ingenios azucareros, las empresas siderúrgicas, la compañía de teléfonos, los bancos y seguros, las minas, etc.», agregando que, «con toda la justificación económica que se quiera y después de largas décadas de una estrategia contraria, el cambio ha sido radical y, en ocasiones, ha resultado difícil de absorber por parte de la sociedad». Sin embargo, con todas las salvedades que se quieran, gracias a estas ventas, que alcanzan ya una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares, se ha podido financiar una reduc-

ción de «la deuda pública, interna y externa, de modo considerable».

Pero, además, el viejo déficit se debía al que tenía el sector público. Como es natural, esta financiación no dejaba recursos exportables. Hoy, en cambio, el déficit externo se debe a un exceso de inversión privada sobre el ahorro interno, que es muy capaz de generar recursos dentro del marco de la competencia internacional.

La lección de Aspe

Es evidente que una reacción tan fuerte ha tenido que tener costes importantes y, también, ha debido abrir nuevas posibilidades de avance. En el fondo, lo sucedido es tan revolucionario que es preciso preguntarse si responde a algún planteamiento casual, aprovechando alguna situación coyuntural, o si pretende alcanzar resultados muy permanentes y, en el fondo, llegar a un nuevo México. La aclaración de esto constituyó el meollo de la intervención de Pedro Aspe en la Tribuna Iberoamericana de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, titulada «Reflexiones sobre la modernización de la economía mexicana».

Tres grandes transformaciones se han procurado para orientar del modo más adecuado posible el «profundo proceso de cambio estructural» emprendido en México. La primera ha sido la reforma macroeconómica, que pretendía «abatir la inflación y el sobreendeudamiento, así como... eliminar las distorsiones que inhiben el crecimiento y, a partir de un nuevo piso económico y de concertación social, estar en condiciones de crear un mejor nivel de vida y mayores oportunidades para los mexicanos».

La inició Miguel de la Madrid y se aceleró con Salinas de Gortari. Como dato espectacular de la misma, se indica que la inflación en 1993 será cercana al 7 por 100, la más baja de las últimas dos décadas, o, lo que es igual, la más reducida que ha conocido «la mitad de los mexicanos, que nacieron precisamente durante esos años». Para lograrla, se pasó de un déficit de alrededor del 17 por 100 del PIB en 1982 «a un superávit, por primera vez en cincuenta años, del 0,5 por 100 del PIB en 1992», excluyendo para su cálculo los ingresos originados por la privatización de las empresas públicas, que, en cambio, han permitido «reducir la deuda pública consolidada total del 62,4 por 100 del PIB en 1988 hasta el 24,9 por 100 del PIB en 1992».

La liberalización del sistema financiero permitió que las tasas de interés respondiesen «con mayor flexibilidad a los cambios en las condiciones del mercado», al regularse el sistema financiero «con base en criterios de capitalización comparables con los estándares internacionalmente aceptados». Esto, que lisa y llanamente supuso el abandono «de un marco institucional de tasas de interés deprimidas y niveles elevados de encaje legal», significó un apoyo evidente al proceso de desaceleración de la inflación.

A estas políticas restrictivas fiscal y monetaria se unió la liquidación de «un contexto de fuerte indización salarial». Apoyándose, como señaló explícitamente, en la experiencia del Pacto de La Moncloa, surgió en 1987 el Pacto de Solidaridad Económica, que se transformó por la Administración Salinas de Gortari en Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, con el que se atajó esta peligrosa situación.

Si es importante esta gran transformación macroeconómica, no lo es menos la transformación microeconómica. Confluye con la macroeconómica, en primer lugar, en la reforma del Estado. Esta, a su vez, exigía, para empezar, una modernización del sistema fiscal, que «consistió en la drástica reducción de las tasas máximas del impuesto sobre la renta a las personas físicas –del 50 al 35 por 100– y a las empresas –del 42 al 35 por 100–»; en «la ampliación de la base gravable, eliminando privilegios que recibían ciertos sectores en detrimento del resto de la sociedad»; en fin, «en vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales». Con esto, en el período 1989-1992 se aceleró la flexibilidad tributaria: el PIB creció un 14,6 por 100 en términos reales y los ingresos tributarios no petroleros lo hicieron en un 31,3 por 100, también en términos reales.

También el proceso de privatización, ampliado con «la participación de la inversión privada en la construcción y operación de obras de infraestructura, a través de diversas modalidades de concesión o arrendamiento», al crear «un Gobierno más sólido y compacto», al mismo tiempo que una economía más competitiva, acelera la modernización del conjunto del sistema económico mexicano.

Con todo ello, la política industrial, que en el pasado «descansaba en subsidios y protección», ahora se apoya en un sector privado cada vez más competitivo y en una reducción del papel de las instituciones del sector público a «aquellas áreas en las que el mercado no funciona adecuadamente o donde se requiere una

mejor distribución de oportunidades». Lo impulsó el auxilio de la banca de desarrollo, al sacarla de la ayuda «a grandes empresas ineficientes que en muchos casos eran propiedad del Gobierno», para llevarla a la financiación de «pequeñas empresas privadas, eficientes y flexibles».

Lo completa la creación, en 1992, como alternativa al viejo sistema de jubilaciones de la seguridad social, del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), «mediante el cual los patronos depositan en las cuentas bancarias individualizadas de más de 10 millones de trabajadores, el 2 por 100 de la nómina, a fin de que el ahorro que se acumula en dichas cuentas les permita complementar su pensión».

Se procura ampliar, en fin, la liberalización del comercio exterior con la firma de tratados de libre comercio; no sólo el NAFTA, sino también con Chile y, en el futuro, con nuevas áreas.

Todo acaba teniéndose que completar con la reforma puramente microeconómica; esto es, con ese «lado difuso del desarrollo» que se puede vislumbrar a través del aumento de la formación bruta de capital fijo en las empresas privadas y en la productividad del trabajo, que permite diferenciar tres tipos de empresas en México: las que pertenecen al sector pujante y competitivo, «que representan aproximadamente una quinta parte del total del sector manufacturero»; las empresas condenadas, porque «para ellas los efectos de la desregulación y la corrección macroeconómica representan un reto difícil de superar», que son otra quinta parte; finalmente, los tres quintos restantes pertenecen a las que inician ahora su reconversión y modernización.

La tercera reforma es la puesta en marcha del llamado *liberalismo social*, enfrentado tanto con el paternalismo como con el populismo, «que cobra sus intervenciones con deuda, inflación y mayor miseria». Pretende esta filosofía que, a través del gasto social y del Programa Nacional de Solidaridad, se procuren mejorar, prioritariamente, las condiciones sociales de los mexicanos.

Por la confluencia de estos cambios, ha surgido un nuevo espíritu en México. Como señaló bellamente Silva-Herzog, «existe una actitud nueva, diferente. No es necesariamente mejor, sino sólo distinta. Hace unas semanas recibí en mi oficina de Madrid a un artesano-zapatero de un pequeño pueblo del Estado de México. Venía a ver las instalaciones y los medios de producción de Valencia y Alicante y a platicar con posibles socios. A pesar de sus años, nunca había salido del país. Me reiteró su convicción de que era

necesario salir, ver otras cosas, aprender. Sólo así podría competir y sobrevivir».

CONCLUSION DE ESTAS TRES SITUACIONES

Estos tres casos ejemplares –y podríamos ampliarlos a los casi heroicos de Bolivia, al esfuerzo de reforma de Nicaragua, al reto colombiano o al cambio de dirección de Ecuador, y así sucesivamente– nos prueban la magnitud del cambio. Se apuesta, con denuesto, a un desarrollo logrado gracias a la inserción en la economía internacional. También a que la competitividad debe lograrse con la aceptación de las reglas del mercado libre. Asimismo, a que el Estado tiene la tarea primordial de achicarse y de aceptar como un lema el del «santo temor al déficit», mientras aumenta su eficacia, para dejar un amplio espacio a la iniciativa privada. La reforma de la seguridad social, hacia sistemas cada vez más relacionados con técnicas de capitalización del seguro privado, debe unirse a una política de rentas que, mediante acuerdos de solidaridad nacional, haga disminuir las presiones salariales que contemplaron, e incluso azuzaron, los populistas de antaño. Y es preciso hacer todo esto de acuerdo con las reglas democráticas, poniendo en el centro de los afanes el culto a la Constitución, sin el que, sencillamente, no se explican estos pueblos.

En resumidas cuentas, y más concretamente en Chile, en Argentina y en México, se observa una activa búsqueda de una nueva política económica que enlace con la etapa del salitre en Chile, con la expansión argentina, que concluye con Yrigoyen, incluso con el porfiriato mexicano. En conjunto, queda más de medio siglo de equivocaciones. Es urgente recuperar el tiempo perdido. Por eso, con el talante de prisa exigente y de despreocupación por lo que ha existido hasta ahora, que caracteriza a todo revolucionario, tres excelentes economistas nos han venido a contar a Madrid sus afanes y sus sueños. Afanes y sueños que expuestos en el viejo salón isabelino de la Casa y Torre de los Lujanes, bajo la mirada atenta de un Laureano Figueroa que escolta en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde su retrato a la reina Isabel II, fundadora de la corporación, traían a la mente una frase de Cabarrús, escrita en su *Discurso sobre la libertad de Comercio concedida por S. M. a la América Meridional*, presentado a la Sociedad Económica Matritense de Amigos del

País el 28 de febrero de 1778: «Haga lo que quiera el error para defender su imperio... podrá acaso sacrificar, en la sombra de la noche, a algún sabio a su furor, pero el fruto de nuestras meditaciones fermentará en el silencio, y sus efectos serán la época feliz que disipe las preocupaciones nocivas.» Argentina, Chile y México, gracias a las meditaciones silenciosas de los economistas, comienzan a atisbar «la época feliz» que les fue arrebatada por el error hace sesenta, setenta, ochenta años. Pero conviene ampliar y completar algunas cosas.

PORTUGAL TAMBIEN NOS OFRECE VALIOSAS LECCIONES

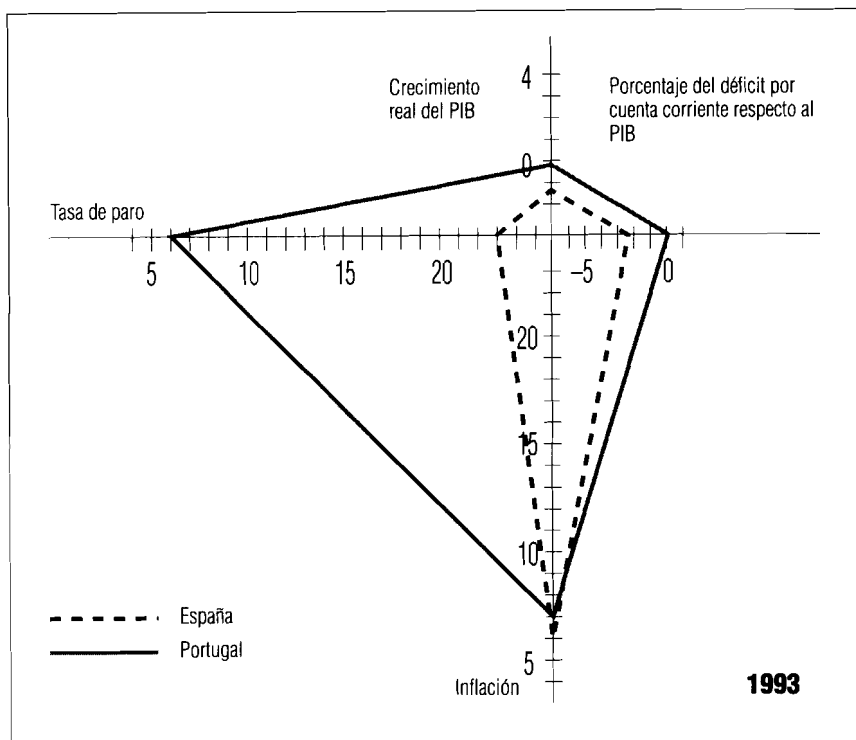
El pasaso 25 de enero de 1994 ingresó como miembro honorario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el Primer Ministro de Portugal Aníbal Cavaco Silva. Cavaco Silva no sólo es un político importante, es un economista muy valioso. A su excelente preparación inicial en el Instituto Superior de Ciencias Económicas y Financieras de Lisboa, completada como becario del Centro de Economía y Finanzas de la Fundación Gulbekian, pronto se unió el doctorado que preparó, durante dos años, en la Universidad de York, bajo la dirección del gran hacendista Alan T. Peacock. Cuando se reintegra a su patria en 1974 —en vísperas de la «revolución de los claveles»—, esa larga estancia le había permitido, además, como señaló al glosar su figura el profesor Fuentes Quintana, disfrutar de las economías externas del conjunto de destacados hacendistas con los que contaban las universidades y centros de investigación británicos en los comienzos de los años setenta (Alan Willams, Jack Wiseman, A. Prest, entre otros).

Por eso, Cavaco Silva sabe lo que dice cuando, en el discurso reglamentario que leyó, «Combinación de políticas de estabilización en un marco de integración: la experiencia portuguesa» (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1994), habla, por ejemplo, del papel de la credibilidad de las políticas y los efectos sobre las expectativas de los agentes económicos, que había sido «subrayado, desde Keynes, por todos los grandes macroeconomistas», o cuando se refiere a que «el Gobierno portugués ha seguido una posición intermedia y ecléctica en la controversia sobre *reglas y discrecionalidad* que ha dominado la política de estabilización y que enfrenta a los defensores de reglas automáticas y estables

para la conducción de la política de coyuntura con los que desean libertad sin restricciones en la fijación de esas políticas», dentro del debate que Robert Barro considera como «una de las áreas donde la nueva macroeconomía ha realizado mayores contribuciones y donde el planteamiento sistemático de la acción del Gobierno ha resultado crucial». En estos momentos tan delicados de la situación económica, Portugal nos da la primera lección, al haber elegido –la última vez, en 1987, por mayoría absoluta– a un buen profesor de economía, especializado en Hacienda, para que rigiese sus destinos.

El trapezoide lusitano

Portugal, dentro de los patrones comunitarios, es un país pobre. En la última estadística de que se dispone por paridades de poder adquisitivo, correspondiente a 1992, que es la que nos permite una figura comparativa mayor, Portugal tenía un producto



interior bruto (PIB) por habitante de 9.191 dólares, el 72 por 100 del español.

Sería absurdo creer que esta relación es estable. Por ejemplo, existía un lógico orgullo español por nuestro desarrollo en los últimos años. Pues bien, comenzando la indagación al comienzo de los diez años previos al choque petrolífero –pensemos que hasta 1976 no se perciben sus daños por doquier, pues existieron multitud de políticas económicas de aplazamiento de sus consecuencias, y no sólo en España–, resulta interesante conocer el crecimiento que experimentó el PIB en términos reales en Portugal: un 162,6 por 100 en 1992 sobre 1967; en España, un 136,8 por 100, aunque, por supuesto, en Japón el aumento fue de un 247,8 por 100, y en Estados Unidos, de sólo el 85,8 por 100.

No sólo es más vivo este desarrollo, sino que existen otros índices de los que puede estar orgulloso el país hermano. En 1992, medido por la tasa normalizada de paro de la OCDE –en la que se define el desempleo como el que afecta a toda persona en edad de trabajar, disponible para el trabajo y que busca activamente un empleo–, éste era en Portugal del 4,1 por 100, frente al 18,1 por 100 español, y aunque ha crecido, ahora la tasa portuguesa se sitúa alrededor del 6 por 100. Finalmente, el déficit portugués por cuenta corriente fue en 1992 del 0,5 por 100 del PIB, mientras que el nuestro alcanzó el 2,3 por 100.

Quizá el gráfico adjunto, que muestra en esos dos trapezoides la situación de las economías española y portuguesa, aclare mejor que de ningún otro modo dónde se encuentran las mayores ventajas macroeconómicas de Portugal sobre España. Conforme el trapezoide es envolvente, mejor está la situación; viceversa, si está envuelto. Salvo por lo que respecta a la inflación, el trapezoide español está envuelto por el portugués.

Sin agobio salarial

Tras la lectura del texto de Cavaco Silva, queda claro que el primer peldaño en el que se apoya el modelo portugués de desarrollo es haber conseguido una buena concertación social. En España, el Gobierno fue incapaz de mantener el espíritu de concertación social del Pacto de la Moncloa más allá de 1985. Recordemos las absurdas observaciones de que eso era aceptar una política corporativista –como si no existiesen otros defectos corporativistas

mucho más preocupantes en nuestra economía, y como si todo corporativismo fuese perverso *per se*-, que en el fondo encubrían la falacia de pensar que un fuerte desarrollo encubría de tal modo los problemas que era preferible no enfrentarse con algo tan desagradable como siempre es el poder sindical. Recuérdese que, además, en 1986, UGT perdía las elecciones sindicales en las grandes empresas, y que parece ser que José María Zufiaur, a causa de ello, presionó a Nicolás Redondo para que rompiese con cualquier concertación social, porque este talante rupturista parecía ser el que había llevado al triunfo a Comisiones Obreras. Añádase a todo esto que, como denunció el propio José María Cuevas, Presidente de la CEOE, los empresarios españoles parecían dispuestos a financiar niveles crecientes de salarios, porque no deseaban conflictos y creían tener asegurado un mercado expansivo.

La Administración portuguesa había conseguido un equilibrio aceptable, indicó el primer ministro lusitano, «a costa de caídas sistemáticas y frecuentemente bruscas en los salarios reales, que disminuyeron en un total acumulado de un 12,2 por 100 de 1976 a 1979 y de un 16,1 por 100 de 1982 a 1984. En 1985, los salarios portugueses estaban por debajo de sus niveles de 1973», agregando que «este fenómeno de caída de los salarios reales, aunque asociado a varios elementos peculiares sociológicos e institucionales de la época, sólo fue posible por la inexistencia de un sistema de indización salarial».

La incorporación de Portugal a la Comunidad Europea, y «desde luego, el encuentro con la economía española, vecina, pero hasta entonces relativamente extraña», impulsaron una seria política de concertación social. «A lo largo del periodo que siguió a 1986 –añade Cavaco Silva–, el Gobierno portugués acordó varios pactos sociales, de incidencia diversa, que contribuyeron de forma importante al éxito de la política de estabilización. En mi primer Gobierno se intensificaron los esfuerzos de concertación entre los agentes sociales: el primer acuerdo en Portugal fue firmado en 1986». Un discurso del primer ministro portugués subrayó entonces el motivo esencial de este esfuerzo: el reto comunitario y, más concretamente el español, que debía superarse, con unas negociaciones basadas en «la inflación esperada», y salvaguardada siempre «la competitividad de las empresas», concluyendo: «Estamos ante una actitud histórica de corresponsabilidad de los agentes económicos en favor del progreso.» Naturalmente, el Gobierno portugués se preocupó «de no introducir, por la vía de una nego-

ciación centralizada, elementos de rigidez en el mercado de trabajo»; antes al contrario, logró avanzar en la flexibilización, «corrigiendo situaciones heredadas del periodo agitado que siguió a la revolución de 1974».

Esa es la profunda y espléndida lección de Portugal a España. El premio o castigo para la mano de obra es evidente, y debiera meditarlo algún imprudente prelado español que señaló que si fuese obrero hubiese respaldado la huelga general del 27-E. Aun con las nulas perspectivas actuales, en *OECD Economic Outlook* de diciembre de 1993 se ofrecen estos pronósticos del paro en 1994 para Portugal y España; respectivamente, el 6 y el 24 por 100.

Un cóctel portugués

Asegurada la concertación social, el gobierno portugués se atrevió a poner en marcha, a partir de 1989, un haz de políticas económicas enhebradas por una mezcla o cóctel de políticas presupuestarias y monetarias muy acertadas.

La política presupuestaria ofrece, a su vez, dos líneas de actuación. Por una parte, «una transformación radical en el sistema fiscal portugués», presidida por la búsqueda del «aumento de la equidad fiscal y de la eficiencia económica, así como la mayor eficacia y sencillez del sistema». Por otro lado, también desde 1989, «se emprendió el gran programa de reprivatización de las empresas públicas nacionalizadas en 1975». Se pretendía con ello, por un lado, mejorar la eficacia del sistema económico lusitano en cuanto a la competitividad de estas empresas –debe recalcar que el horizonte comunitario está muy presente en todo esto–, y, por otro lado, «promover la reducción de la deuda pública y del peso del Estado en la economía, contribuir al desarrollo del mercado de capitales y extender la participación de los ciudadanos en el capital de las empresas», dentro de las líneas del accionariado popular.

Gracias a esto, la política monetaria pudo «emanciparse» de la política presupuestaria. A la liberación del sistema monetario portugués de sus ataduras, para poder afrontar el desafío de los mercados financieros europeos, se unió la Ley Orgánica del Banco de Portugal, de octubre de 1990, que representó «un corte radical con el pasado de acceso privilegiado del Estado al crédito», por lo que «formaliza una nueva fase en la conducción de la política de estabilización protuguesa». De ahí pasó Cavaco al asunto de la inde-

pendencia del Banco de Portugal: «Al impedirse que el banco central sea una fuente fácil de financiación para los gastos del Estado, se permite que la política monetaria sea autónoma (respecto de la... presupuestaria», aunque «es importante no olvidar que independencia no significa contradicción ni tampoco enajenación de sus responsabilidades».

Este cóctel, *policy mix* o mixtura de políticas económicas, tendría que sabernos a ambrosia a los españoles. Con sencillez, sin engolamientos, con talante de amigo, también nos lo brindó como lección Cavaco Silva como miembro de honor de nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

LA CEPAL Y LA RECTIFICACION DE IGLESIAS

Al lado de estos grandes reformadores de la economía de sus patrias respectivas que son Cavallo, Aspe, Foxley y Cavaco, brilla con luz propia otro: Enrique V. Iglesias. En su biografía resplandecen tres aspectos: una excelente formación intelectual; un papel muy importante en una de las revoluciones ideológicas más importantes que han existido no sólo en Iberoamérica, sino en todo el Tercer Mundo; finalmente, una experiencia diplomática extraordinaria.

En primer lugar, este español –de familia del occidente asturiano– trocado en uruguayo a causa de una emigración que le condujo de muchacho a Montevideo, se graduó en Economía y Administración en 1953 en la Universidad de la República. El complemento de su formación académica, a través de los estudios de especialización y posgrado, tuvo lugar en centros universitarios de Francia y Estados Unidos. Entró así en la vida de los negocios de su país a través del sector privado, como director gerente de la entidad crediticia Unión de Bancos de Uruguay. De ahí pasaría al sector público en el puesto de Presidente del Banco Central de Uruguay.

El paso siguiente en su biografía lo pone en contacto con el mundo de CEPAL. Bajo el impulso de Raúl Prebisch, esta singular institución era amalgama de una Comisión de las Naciones Unidas y de un centro de investigación y análisis económico, e incluso tenía mucho de entidad docente, tanto directamente –en sus propios locales de Santiago de Chile y en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social para América Latina

(ILPES), que dirigió el propio Prebisch— como en proyecciones tan importantes como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). El *estructuralismo económico latinoamericano* se gestó en los despachos de CEPAL, de tal manera que esta ideología —el último de los retoños nacidos del ya añoso árbol del historicismo económico— orientó de forma progresiva la política económica de las naciones iberoamericanas. En los centros académicos del continente y en sus institutos de investigación, la difusión de tesis como las de la *teoría de la dependencia* fue extraordinaria. Como un reguero de pólvora, crecía en todas partes el convencimiento de que existían diferencias radicales entre las estructuras económicas de los países del centro y de la periferia, con lo que se había atacado con proyectiles dirigidos a la santabárbara de todo el montaje teórico de la teoría del comercio internacional, de origen en Ricardo, que había alcanzado finuras extraordinarias con los trabajos de los Taussig, los Haberler, los Viner, los Machlup o los Leontief, y en especial con los teoremas Heckscher-Ohlin-Samuelson, que enlazaban con el resto del análisis neoclásico. Fue esencial, en ese sentido, la famosa proposición Singer-Prebisch del deterioro de la relación real de intercambio de la periferia. Desde ahí se había desprendido toda una importante formulación para orientar el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo hacia una industrialización, tanto para remediar otro punto clave de la explicación de Prebisch —la elasticidad renta de las importaciones industriales de la periferia es superior a uno y es mucho mayor que la del centro, mientras que la elasticidad precio para las materias primas y alimentos que suelen exportar los países del Tercer Mundo es más baja que la de los productos industriales— como para aprovechar para el desarrollo las *economías externas* que genera una industrialización. Como ésta no se pone en marcha de modo espontáneo, es preciso que la impulsen una amalgama de actividades estatificadoras y de reservas del mercado nacional a procesos de sustitución de importaciones. Como se observa, no existen diferencias demasiado profundas con las recomendaciones de tipo populista-autoritario y populista-marxista que habían germinado en toda Iberoamérica.

Todo esto provocó una controversia muy amplia en toda la región iberoamericana. El papel histórico de Iglesias fue, como Secretario Ejecutivo de CEPAL, conducir a través del largo período de su mandato, que duró de 1972 a 1985, desde unas aguas en exceso tempestuosas —pues habían causado las medidas

estructuralistas, en buena medida, la crisis de la deuda externa de 1982– hasta otras más tranquilas, de progresiva aceptación de los modelos de desarrollo de raíz neoclásica, que comenzaron planteándose por algunas formaciones políticas de la derecha iberoamericana y que, posteriormente, acabaron siendo asumidas no ya por partidos de centro, como puede ser la Democracia Cristiana chilena, sino por partidos populistas como el Justicialismo, y por el PRI mexicano, que prefirió ser asesorado más por el ITAM y sus mensajes neoclásicos que por la UNAM y sus puntos de vista estructuralistas latinoamericanos.

Señalaba que otra de las características de Enrique V. Iglesias es su extraordinaria experiencia diplomática. Para mí, eso resplandece en el papel que desempeñó en 1986, en la Conferencia de Punta del Este, como Canciller de Uruguay, al presidir la reunión ministerial de la que nació la Ronda Uruguay del GATT, que ahora acaba de quedar formalmente aprobada. En estos momentos, como Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha conseguido tener una extraordinaria influencia en los foros internacionales.

La entrada de la ética

Precisamente, en esos momentos en que se verificaba una tan profunda alteración en la política económica en estos cuatro países aquí presentados –Argentina, Chile, México y Portugal–, era necesario proclamar con fuerza que esto sólo no bastaba, como hizo Enrique V. Iglesias en su discurso de aceptación de la distinción de académico honorario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que tituló «Ética, sociedad y desarrollo. Una visión iberoamericana» (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 16 de noviembre de 1993). En él señaló que «si bien es cierto que las nuevas políticas económicas de corte liberal han introducido la racionalidad económica que propicia el crecimiento, no es menos cierto que las viejas limitaciones del mercado para atender los problemas sociales se hacen más patentes, especialmente cuando impera el dogmatismo en la aplicación de esas políticas». Palabras, por otro lado, semejantes a unas que Valentín Andrés Álvarez publicó en su ensayo «Capitalismo y orden económico», aparecido en 1948 en la *Revista de la Escuela Social de Oviedo*, sobre esta dicotomía del liberalismo económico: «La eco-

nomía libre del mercado es un sistema de funcionamiento perfecto que difícilmente podría ser superado... Pero el sistema tiene sus límites... Por eso me permito decirles que el descrédito casi universal del liberalismo económico, a partir de la primera guerra mundial, fue merecidísimo en tanto rebasó aquellos límites, pero fue grandemente injusto en tanto permaneció dentro de ellos. No fracasaron sus principios, sino la abusiva intromisión de ellos en sectores que rechazan, por esencia, las normas de la pura economía. Nadie puede decir que es injusto o arbitrario el precio que se forma en un mercado libre según la ley de la oferta y la demanda. Es el precio teóricamente racional y prácticamente razonable. En cambio, nadie dirá que es justo un salario que no llegue al mínimo de subsistencia, aunque se forme con arreglo al mismo principio de la economía libre.»

Por eso, Enrique V. Iglesias, que, diariamente, desde su puesto actual de Presidente del BID, ha de enfrentarse con los problemas agobiadores de las regiones pobres de América, ha de recordar que, entre otras cosas, «la insensibilidad de las fuerzas del mercado, a diferencias de ingresos y de oportunidades», es lo que «abre el campo a cuestionamientos e interrogantes tan viejos como aquellos que estuvieron presentes en el surgimiento del marxismo».

Para resolver, por tanto, del modo más adecuado la cuestión del desarrollo del cambio social no es suficiente con la implantación de una política económica ortodoxa. Es preciso que todo encaje «en una base cultural» a lo que se debe agregar que esto es «una cuestión de valores», lo que, a renglón seguido, lleva a sostener a Enrique V. Iglesias que «la ética es el segmento fundamental de la sociedad y el desarrollo, y de que no hay recesión, crisis, guerra o revolución alguna que pueda ser tan destructiva como el descrédito de los valores y el debilitamiento del sentido ético que debe tener el proceso de desarrollo económico, político y social». Por supuesto que, inmediatamente, Iglesias se siente obligado a señalar que debe precisar que al referirse al papel de la moral en la sociedad y el desarrollo, «como economista del desarrollo», debe hacerlo «con relación a la vida pública y no a la privada».

Esta dualidad cuajó, en el siglo XIX, en un conjunto de situaciones bien conocidas, pues existía un campo para la moral, el privado, pero no tenía aquella ningún papel en el público, ya que en éste existían «conflictos de intereses valorativamente neutros, que eran zanjados por la autoridad». Esto coexistía con «un liberalis-

mo competitivo y prescindente de todo valor ético, el cual consiguió durante mucho tiempo cohabitar con valores tradicionales del ámbito familiar». El Estado ejercía el control de la sociedad, sin prestar atención a la equidad, cuando tres sucesos ideológicamente emparentados –el Manifiesto Comunista de 1848, la Comuna de París en 1870 y la Revolución de Octubre de 1917– son continuados por la gran depresión, el auge de los nacionalismos autoritarios y la segunda guerra mundial, que los derrota y da vía libre a un pensamiento derivado de una alianza de la socialdemocracia que abandona el marxismo y el keynesianismo. De este modo, se estructura el mensaje novísimo del Estado del bienestar, mientras, simultáneamente, se iniciaba en 1947 la guerra fría. Todo eso ha quebrado a partir de mediados de los años setenta, abriendo paso a una economía mundial capitalista crecientemente globalizada. En ella se buscan por doquier nuevos fundamentos morales.

Como es natural, esta oleada de cambio llegó a Iberoamérica, acompañada con un proceso creciente de democratización, que se inscribe, como ya hemos expuesto, nada menos que en las raíces mismas del nacimiento de las diversas naciones que la componen. Por eso, la importancia del discurso de Iglesias es poner el colofón ético, nuevo o renovado, a los de los otros cuatro. Para Iglesias: «En lo económico, la región realiza una drástica revisión de las políticas económicas, como reacción a la *década perdida* de los ochenta y las penosas lecciones que heredamos de la crisis de la deuda externa... Pero también estamos tomando conciencia, una vez más, que el mero crecimiento económico no asegura la equidad y la justicia social, y que sin estos logros será imposible consolidar y legitimar las democracias políticas», para lo que será indispensable, agrega Iglesias, «realizar algunas transformaciones que deberán asentarse en nuevos valores sociales, que tienen directa relación con las dimensiones éticas a las que nos venimos refiriendo».

Los cuatro aspectos del cambio iberoamericano que requieren nuevos, o renovados, enfoques éticos –un nuevo enfoque integrado del desarrollo, una mayor integración social a partir de una reforma social integral, la ampliación y consolidación de la democracia política y, finalmente, la creación de un Estado solidario– son tan importantes como los que afectan en exclusiva al saneamiento económico. Conviene explicarlo algo más detenidamente.

EMPEORA LA CANSADA IBEROAMERICA

Los muy recientes sucesos de Chiapas, en México, y de Santiago del Estero, en la Argentina, tienen, probablemente una enjundia superior a la de un simple alzamiento momentáneo. Todos los espartaquismos de este tipo están condenados a esfumarse si sólo son eso; pero constituyen el preludio de alteraciones más profundas si reciben aliento de la opinión pública.

Por eso, en este momento en que cruje un modelo económico en el que muchos teníamos puestas las esperanzas, conviene volver a los datos económicos subyacentes. El 16 de enero de 1994 se ofrecía en ABC un contraste de juicios sobre lo que sucede en México. Al lado de los disparates del argentino Abel Posse y de las majaderías de los que nada saben y se empeñan en decir algo, aparecían seis artículos muy dignos de tenerse en cuenta: el de Carlos Castilla Peraza, Presidente del Partido de Acción Nacional (PAN); el de Enrique Krauze, sobre Zapata; la espléndida «Crónica incompleta de una rebelión anunciada», de Torcuato Tena Benjumea; el implacable alegato contra el PRI titulado «Los cuervos de Chiapas», de Alvaro Vargas Llosa; el sobrecogedor «Extrañas cortesías», de Gabriel Zaid, y el buen sentido de Jorge Edwards en el titulado «El eterno retorno». En los seis, para explicar lo ocurrido, se echa mano de lo que acontece en la economía de la región. No es diferente lo que se señala en el artículo de Tim Padgett «Rage of the zapatistas», en *Newsweek* del pasado 17 de enero, y en el de Michael S. Serrill «Zapata's revenge», en *Time* de la misma fecha, o lo que este último recoge de labios de Peter Hakim, presidente del Inter-American Dialogue, una institución de intercambio intelectual que reside en Washington.

Un gran cansancio

En la actual situación iberoamericana, existe un muy alto riesgo de crisis económica; por una parte, a causa de motivos endógenos, pero también debido a potentes causas exógenas. Lo esencial de los primeros se liga al cansancio, porque el camino hacia la tierra que mana leche y miel está resultando más arduo de lo que se supuso por la mayor parte de los ciudadanos. El que la alternativa sea la esclavitud en Egipto pasa, casi siempre a olvidarse. Lo fundamental de las causas externas radica en la persis-

tencia de la crisis económica mundial. Tendría que denominarse a esta etapa la de la mala suerte iberoamericana. A partir de 1982, cuando la economía mundial comienza a desperezarse, se inicia la violenta crisis de la deuda externa, que, al provocar el abaratamiento de los productos iberoamericanos –para salir de esta crisis de pagos internacionales, ¿cabía otra solución que la de vender al exterior lo más posible, aunque fuese envileciendo las cotizaciones?–, afianza la prosperidad de los países industriales. Esta última avanza poderosamente hasta 1990 y cuando, por fin, hacia esa fecha, Iberoamérica decide poner en marcha la política económica que había estúpidamente rehuido por la presión de los populismos, una crisis mundial importante hace que se dilate en el tiempo la expansión que siempre acaba de ser el fruto de una política económica seria.

El 17 de diciembre de 1993 se repartió el trabajo, siempre utilísimo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), titulado *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1993*. Por supuesto que el producto interior bruto (PIB) aumentó en el área un 3,2 por 100, pero esto supuso que, por habitante, sólo mejoraba un 1,3 por 100, e incluso que empeoraba en algunas naciones. Dejemos a un lado las situaciones aberrantes de Haití, donde el PIB por habitante descende un 12,6 por 100 respecto a 1992, y de Cuba, donde la cerrilidad de sus dirigentes parece haber dejado en la cuneta a la muy razonable *reforma Solchaga*, cuyo texto íntegro se publicó en España en *El Mundo* el 13 de enero de 1994, a pesar de que, según una estimación muy probable de Javier Fernández Olano, aparecida en su artículo «Cuba, una crisis dentro de la crisis», publicado en *Expansión* el 3 de enero de 1994, parece haber disminuido el PIB global cubano un 50 por 100 desde 1990. En el resto, aparecen cinco repúblicas que empeoran en su PIB por habitante. De peor a mejor comportamiento son: Nicaragua, Venezuela, México, Ecuador y República Dominicana.

Aparte de eso, en el citado *Balance preliminar...* se consigna que en «la mitad de los países de la región sobre los que se dispone de información han experimentado una desaceleración de su ritmo de crecimiento. Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá han moderado las elevadas tasas de expansión registradas en el año anterior».

Más índices preocupantes

Esa situación preocupante se debe, en primer lugar, señala la CEPAL, al «efecto acumulativo de las políticas de ajuste y las reformas adoptadas en los años anteriores, que lentamente han ido modificando las bases sobre las que funcionan las economías». Claro que en dos países iberoamericanos, Nicaragua y Venezuela, simultáneamente se han acentuado la recesión y la inflación. En la mayoría de los países en que se observa una atenuación de la inflación, «se registra asimismo una desaceleración del crecimiento, aunque en algunos casos a tasas aún satisfactorias».

Finalmente, ha flexionado a la baja la transferencia neta de recursos medida en miles de millones de dólares, restando de los ingresos netos de capitales los pagos netos originados por las inversiones anteriores. Es importante que, a pesar de todo, sea positivo este saldo, porque ha permitido más que compensar el déficit de la balanza iberoamericana por cuenta corriente, con lo que, según el citado *Balance preliminar...*, «las reservas internacionales de la mayoría de los países de la región volvieron a crecer por quinto año consecutivo, aunque en una magnitud menor que durante el bienio anterior». La deuda externa desembolsada alcanza, por eso, otro máximo histórico, con 487 miles de millones de dólares. La confianza internacional, como muestran los precios de oferta de los pagarés de la deuda externa en el mercado secundario, compilados por Solomon Brothers y Merrill Lynch, mejora para todos los países.

Este cansancio en la lucha contra la inflación se une a otro derivado del esfuerzo exportador, que ha de soportar caídas notables en los precios de algunos productos mineros, energéticos y alimenticios muy importantes, mientras, en cambio, crecen con más fuerza los de los artículos de importación. La relación de precios de importación respecto a los de exportación empeoró un 4,9 por 100 en 1993, y un 18,1 por 100 acumulado de 1991 a 1993. Desde 1984, esta relación real de intercambio mantiene una caída persistente. Quiere esto decir que Iberoamérica, simplemente para cubrir del mismo modo su necesidad de bienes del exterior, ha de ofrecer cada vez más bienes propios, o sea, más esfuerzo exportador. Por supuesto que en esta caída tienen un puesto todos los países petroleros más Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.

La protesta popular

Todo esto se une al incremento del paro urbano en Argentina, Ecuador, Honduras y México. El salario mínimo real urbano cae en México, en Ecuador y en Uruguay. Pero, sobre todo, el pueblo de la región, que alcanza ya los 450 millones de habitantes, observa que para mejorar su PIB por habitante un 1,3 por 100, gracias a la inclusión de Brasil, ha de experimentar una inflación media, a causa también de Brasil, del 800 por 100. Pero, si tenemos en cuenta que ésta es una media muy poco significativa, un índice elemental de miseria o malestar (IM), calculado restando del incremento del PIB por habitante el incremento del IPC (Índice de Precios al Consumo), nos muestra, eliminando a un Brasil que sólo sirve para perturbar, que se estaba en el buen camino. Lo vemos en el siguiente cuadro, en el que, conforme el IM es menor, la situación empeora.

Sólo descende el IM en Chile, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Pero a este buen camino emprendido se le exigen frutos inmediatos, porque vastas capas de población se sienten cansadas. El escritor mexicano Carlos Fuentes se hace portavoz en su artículo «Una nueva izquierda latinoamericana», publicado en *El País* el 27 de diciembre de 1993, de la postura de su compatriota el politólogo Jorge Castañeda, que acaba de publicar *La utopía desarmada. La izquierda latinoamericana después de la guerra fría* (Alfred Knopf), donde escribe esta frase: «Los éxitos macroeconómicos... no se han transformado en condiciones mejores de vida para la mayoría.» Gabriel Zaid, también mexicano, dirá que tales éxitos se consiguen «a costa de la sociedad: con mayores impuestos, ventas de patrimonio social, salarios castigados para los trabajadores, réditos castigados para los ahorradores». Con ambos se solidariza Carlos Fuentes. Acaba de publicar Tito Drago su ensayo, *Chile. Un doble secuestro* (Editorial Complutense, 1993). En él sostiene que «el fracaso del neoliberalismo económico queda demostrado por su propia experiencia, sin atenuantes», pero que «no se puede decir lo mismo del modelo de cambios económicos y sociales, impulsado por Salvador Allende», que se basaba, lo dice Tito Drago un poco después, en este falsísimo postulado que el Presidente Allende expuso en su primer mensaje al Congreso Pleno del Parlamento de Chile, en mayo de 1971: «Es éste un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales de realizar las utopías más generosas del pasa-

do. Sólo nos impide lograrlo el peso de una herencia de codicias, de miedos y de tradiciones institucionales obsoletas.»

CUADRO NUM. 5
INDICES DE MISERIA EN HISPANOAMERICA

<i>País</i>	<i>IM 1992</i>	<i>IM 1993</i>
Argentina	- 10,1	- 2,9
Bolivia	- 10,0	- 2,5
Colombia	- 23,3	- 18,4
Costa Rica	- 12,8	- 5,7
Chile	- 4,2	- 7,8
Ecuador	- 59,2	- 32,7
El Salvador	- 17,7	- 10,8
Guatemala	- 12,5	- 11,8
Honduras	- 3,9	- 12,7
México	- 11,4	- 10,0
Nicaragua	- 6,9	- 32,9
Panamá	+ 4,4	+ 1,9
Paraguay	- 18,8	- 18,5
Perú	- 61,4	- 36,9
República Dominicana	- 2,1	- 3,4
Uruguay	- 52,1	- 50,9
Venezuela	- 27,3	- 47,2

Cuando ya se veían los confines de la tierra prometida, muchos hispanoamericanos pueden volver hacia Egipto, hacia un atroz pasado, La irresponsabilidad de los Carlos Fuentes, de los Zaid, de los Jorge Castañeda, de los predicadores de la Teología de la Liberación, de las mil y una organizaciones de ecologistas, de vetero y neomarxistas, de indigenistas sencillamente escalofría.

Frente a estas actitudes, donde se mezclan la demagogia y la frivolidad, en este volumen se recogen cinco talantes ejemplares. Han germinado en naciones hermanas de España, que tienen problemas tan parecidos a los nuestros que la lección es inmediata. Estos cinco protagonistas bien pueden asumir con orgullo una frase de un diálogo de *Pedro Páramo*, el extraordinario relato del mexicano Juan Rulfo, que tan unido está, por cierto, a multitud de cuestiones planteadas en este libro:

«—¿Dónde estás?

»—Estoy aquí, en tu pueblo. Junto a tu gente. ¿No me ves?»

Debido a sus obras y a sus palabras, vemos nítidamente que los cinco están junto a su gente.